

En busca de salidas del laberinto neoliberal: movimientos sociales y estados reconfigurados en Brasil y México

John Gledhill¹

Recibido: 31 de octubre de 2019/Aceptado: 28 de enero de 2020

Resumen. Tanto en Brasil como en México, las elecciones de 2018 resultaron en un “cambio del régimen” importante. Aunque la victoria de la ultraderecha en Brasil parece una réplica de tendencias en los Estados Unidos y Europa, expresando un rechazo de la clase política establecida, algunos analistas ven el triunfo de López Obrador en México como un fenómeno de la misma índole, sugiriendo que se trata simplemente de versiones “derechistas” e “izquierdistas” de una reacción “populista” a condiciones de crisis. Este trabajo pretende matizar este análisis, dando mayor consideración a las distintas historias de Brasil y México, junto con la configuración de fuerzas, nacionales y transnacionales, que están detrás de los escenarios actuales. Desde una perspectiva que toma en cuenta tanto las duraderas estructuras del poder social como los impactos de políticas económicas y sistemas de mando neoliberales sobre el tejido social, la coherencia de movimientos anti-sistémicos, y la administración de la vida política, se aprecia mejor los desafíos de salir del laberinto neoliberal en base a acciones “desde abajo”.

Palabras clave: Brasil; México; populismo; izquierdas; ultraderechas; neoliberalismo; movimientos sociales; autoritarismo; democracia; militares.

[en] In search of exits from the neoliberal labyrinth: social movements and reconfigured states in Brazil and Mexico

Abstract. In both Brazil and Mexico, the 2018 elections resulted in an important “regime change”. Although the victory of the ultra-right in Brazil appears a replica of tendencies in the United States and Europe, an expression of rejection of the established political class, some analysts see the triumph of López Obrador in Mexico as a phenomenon of the same type, suggesting that it is simply a matter of “right-wing” and “left-wing” versions of a “populist” reaction to crisis conditions. This article aims to qualify this analysis, giving greater consideration to the different histories of Brazil and Mexico, together with the configuration of forces, national and transnational, behind the contemporary scenarios. From a perspective that takes into account both enduring structures of social power and the impacts of neoliberal economic policies and rule systems on the social fabric, the coherence of anti-systemic movements, and the administration of public life, one can better appreciate the challenges to exiting the neoliberal labyrinth on the basis of actions “from below”.

Keywords: Brazil; Mexico; populism; the left; the ultraright; neoliberalism; social movements; authoritarianism; democracy; the military.

Sumario. 1. Introducción: ¿Nuevos proyectos o vueltas al pasado? 2. Brasil: ¿hacia la barbarie? 3. México: ¿hacia una cuarta transformación? 4. Conclusión: el laberinto neoliberal y el pasado en el presente. 5. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Gledhill, J. (2020). En busca de salidas del laberinto neoliberal: movimientos sociales y estados reconfigurados en Brasil y México, en *Revista de Antropología Social* 29(2), 133-150.

1. Introducción: ¿nuevos proyectos o vueltas al pasado?

Este trabajo ofrece un análisis comparativo de las causas y consecuencias del aparente cambio de rumbo en el proceso de desarrollo nacional que resultó de las elecciones de 2018 en Brasil y México. Ya que se

trata de procesos todavía en curso en el momento de escribir este texto, es un análisis inevitablemente preliminar,² dirigido a dos problemas principales. Primero, quiero explorar qué tienen en común los cambios políticos de los dos países, a pesar de las diferencias importantes entre los dos nuevos gobiernos, tanto

¹ Social Anthropology, School of Social Sciences, the University of Manchester (john.gledhill@manchester.ac.uk)

² Mi análisis se funda en una revisión bibliográfica de obras que ofrecen pistas valiosas para hacer un diagnóstico de los procesos actuales, sus raíces históricas y sus dimensiones globales y transnacionales, pero también en algunos resultados de mis propias investigaciones etnográficas en los dos países y de las investigaciones etnográficas de colegas. Uno de los propósitos del trabajo es el de señalar áreas de debate en que la investigación etnográfica puede hacer una aportación distinta, sobre todo cuando se pueden realizar estudios a largo plazo en el mismo lugar o región.

en términos del modo en que consiguieron el poder como en términos de sus ideologías. Segundo, usaré este análisis para indagar más sobre los impactos duraderos del neoliberalismo en América Latina, desde una perspectiva que reconoce que se trata de impactos no solamente sobre la organización económica, sino también sobre la organización social y las técnicas empleadas para gobernar la sociedad, cuestiones que son muy importantes para entender la evolución de la vida política y las relaciones actuales entre movimientos sociales, partidos políticos y el estado. Aunque la “neoliberalización” trascendió fronteras nacionales (Gledhill, 2005), sus formas específicas han sido conformadas por distintas historias nacionales, y es imprescindible tomar una perspectiva histórica para entender otros aspectos de las diferencias entre las experiencias brasileñas y mexicanas. Sin embargo, voy a concluir que los cambios provocados por el neoliberalismo han sido suficientemente profundos para impedir una sencilla vuelta al pasado, aún cuando algunos de los actores políticos sueñan con recuperarlo.

A primera vista, los cambios políticos producidos por las elecciones de 2018 no podrían aparecer más distintos. En el caso de Brasil, produjeron un triunfo del candidato de la ultraderecha, el exmilitar Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), contra Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). El PT había gobernado Brasil durante catorce años hasta el golpe parlamentario de 2016, que terminó con el mandato de Dilma Rousseff por la vía del “*impeachment*”, produciendo su sustitución en el cargo, conforme a la Constitución, por su vicepresidente, Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Durante los dos años hasta la celebración de las siguientes elecciones, el gobierno de Temer implementó “reformas” que obedecieron a la lógica de la definición general del proyecto neoliberal propuesta por David Harvey (2007): un reajuste de las relaciones económicas entre las clases dominantes y las clases subalternas a favor de las primeras que revierte las tendencias hacia una sociedad menos desigual provocadas por las medidas redistributivas adoptadas por gobiernos socialdemócratas. Sin embargo, el proyecto de Bolsonaro pretendía ir más allá de un cambio de políticas económicas. Cuando decía que la “izquierda” había llevado a Brasil a la ruina, quería referirse tanto a la ruina moral como a la económica.

En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador (en adelante, AMLO, como está apodado por el público mexicano) había sido candidato a la presidencia en dos elecciones anteriores (las de 2006 y 2012), postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En estas elecciones, controvertidas, pero al final perdidas, los contrincantes de AMLO le habían tachado de ser un homólogo mexicano del venezolano Hugo Chávez. Por lo tanto, a veces AMLO ha sido pintado como un “izquierdista”, aunque él mismo se define como un “republicano”, buscando fortalecer el Estado de derecho y sanear instituciones lastimadas por la corrupción política. Su héroe principal en la

historia mexicana es el liberal Benito Juárez, distinguido tanto por su defensa de la soberanía nacional como por su compromiso con el proyecto de transformar una sociedad de castas y estamentos en una sociedad en que todos serían “ciudadanos”, iguales ante la ley. Otro modo de ver a AMLO sería decir que replica una tradición “populista” de corte “progresista”, aunque también sea autoritaria, en el sentido de buscar mejorar la calidad de vida de las clases populares. En este sentido y en su reivindicación de mayor nacionalismo económico, AMLO también se identifica con la época “clásica” del populismo mexicano bajo el mando del presidente Lázaro Cárdenas (1934-40), cuyo homólogo brasileño fue Getúlio Vargas (1934-45, 1951-1954).

Irónicamente, si AMLO se parece a otro líder nacional de la época de Chávez sería al expresidente petista de Brasil, Luiz Inácio “Lula” de Silva, considerado el “enemigo” número uno por Jair Bolsonaro. Lula no sería un “populista” en el sentido planteado como el rasgo común de todos los populismos, tanto de la izquierda como de la derecha, por Ernesto Laclau (2005): un líder cuyo discurso político se basa en una fuerte oposición entre “el pueblo” y un “enemigo” del interés común. Para conquistar el poder (después de tres intentos fallidos), Lula optó por abandonar la otrora postura socialista de su partido, convirtiéndolo en un partido socialdemócrata que abogaría por mayor justicia social dentro del marco del capitalismo y de la conciliación entre clases. Por lo tanto, igual que otros partidos socialdemócratas de la misma época, el PT aceptó algunos principios neoliberales de la gestión de la vida económica y la “administración” de la sociedad y sus desigualdades (Gledhill, 2005; Nuijten, Koster, De Vries *et al*, 2018).

Estos apuntes iniciales nos dan un motivo para no contrastar los gobiernos de Bolsonaro y AMLO en términos de una sencilla oposición entre “populismos de la derecha” y “populismos de la izquierda”. En 2018, AMLO fue el candidato de un nuevo partido político del centro-izquierda que él mismo fundó en 2014, el MORENA (Movimiento Regeneración Nacional), también socialdemócrata, encabezando una coalición llamada *Juntos Haremos Historia* que incluyó al Partido de Trabajo, con una imagen más izquierdista, pero también al Partido Encuentro Social (PES), un partido que rechazaba acusaciones de ser un partido religioso de corte evangélico pero que se caracterizaba como “el Partido de la Familia”, adoptando posturas ideológicas de la centroderecha. El triunfo de López Obrador fue abrumador. No solamente ganó la presidencia con más de 53% de los votos, llevando una ventaja de 31% al candidato en segundo lugar, Ricardo Anaya, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), cuyos candidatos ganaron las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, sino MORENA arrasó en las elecciones para diputados y senadores, dando al nuevo mandatario una mayoría absoluta en el congreso nacional. El triunfo de Bolsonaro fue más limitado. Bolsonaro consiguió derrotar a Haddad, el candidato petista, en el segundo turno de la

elección presidencial, con 55,1% de los votos válidos³, pero el partido de Bolsonaro no tiene control del congreso, en el cual treinta partidos políticos consiguieron representación en 2019.

Desde los primeros meses de su mandato Bolsonaro tuvo dificultades en manejar las relaciones entre el ejecutivo y esta legislatura fragmentada, a pesar del hecho de que partidos de la derecha y centroderecha predominan aún más en la nueva legislatura que en la anterior. La composición del congreso es una reflexión de una serie de factores estructurales que sirven para limitar la representatividad social de los senadores y diputados elegidos, incluyendo la reproducción de máquinas electorales ligadas a arraigadas elites regionales que disponen de amplios recursos para asegurar la “adhesión” de un número adecuado de electores (Heredia y Palmeira, 2008), el papel de poderosos intereses económicos en el financiamiento ilegal de campañas (el sistema llamado la “caja dos”), y el peso actual de algunas iglesias evangélicas en la vida política. En la campaña de Bolsonaro se destacó el apoyo que recibió de la Iglesia Universal del Reino de Deus, una iglesia de amplio alcance transnacional, y también gran negocio lucrativo. La Iglesia Universal es dueña de una cadena nacional de televisión en Brasil, Record, adquirida para extender la influencia que este tipo de iglesias suele ejercer directamente sobre sus feligreses a nivel local, que se han multiplicado constantemente durante las últimas décadas. A principios de su administración, Bolsonaro se enfrentó públicamente con el líder de la cámara baja, Rodrigo Maia, del derechista partido demócrata. El gobierno de Bolsonaro pretende implementar las políticas deseadas por los grupos asociados con la derecha y centroderecha en el congreso. Quiere fortalecer políticas de “mano dura” de seguridad pública, y eliminar restricciones impuestas sobre los grandes negocios agropecuarios y la minería por las políticas de protección ambiental y los derechos territoriales de indígenas y afrodescendientes. Es favorable a los proyectos “moralizantes” de los políticos ligados a las iglesias evangélicas, incluyendo los que abogan en contra de las relaciones homosexuales y el aborto. Rodrigo Maia apoyaba con bastante entusiasmo el proyecto de “reforma” del sistema de pensiones que fue el asunto prioritario en la agenda económica de la nueva administración. Sin embargo, Bolsonaro a veces fracasó en el desafío de “gobernar” el congreso, y hasta llegó a tener conflictos con el mismo partido por el cual fue elegido presidente.

Tal vez los problemas que han surgido entre el ejecutivo, el congreso, y también la corte suprema, hayan resultado de una falta de habilidad política por parte del presidente, pero puede ser que tengan motivos más si-

niestros. Aunque se ha mostrado un poco más pragmático últimamente, Bolsonaro dijo que no quería reproducir “la vieja política” de manejar las relaciones entre el ejecutivo y la legislatura, repartiendo dinero federal y posiciones en su gobierno para conseguir el apoyo de otros partidos. Al mismo tiempo, confiaba en el apoyo de tres de sus hijos que también son políticos, Flávio, senador, Carlos, concejal en el ayuntamiento de Rio de Janeiro, y Eduardo, diputado federal y bien ligado a las fuerzas de la ultraderecha internacional encabezadas por Steve Bannon. Por un tiempo, Bolsonaro se atrevió a proponer a Eduardo como embajador brasileño en Washington, con la aprobación de Donald Trump. Por lo tanto, tal vez la estrategia alternativa para gobernar que Bolsonaro tenía en mente fuera más patrimonial que “republicana”, buscando minar al orden institucional existente para instalar un tipo de mando autoritario apoyado por llamados directos a su base popular. Bolsonaro, sus hijos y sus ministros son muy activos en las redes sociales, usando Twitter de la misma manera que Trump.

En términos de habilidad política comprobada, una comparación entre Bolsonaro y AMLO no favorecería a Bolsonaro. Los dos son políticos con décadas de experiencia, pero Bolsonaro, por veinticinco años diputado federal en Rio de Janeiro, siempre fue un legislador sumamente mediocre en términos de su desempeño. Los dos candidatos se aprovecharon en 2018 de una ola de sentimientos “antipolíticos” provocada por dificultades económicas y escándalos de corrupción involucrando a los partidos políticos que habían dominado el escenario político en el pasado, pero AMLO ya fue un político muy conocido a nivel nacional que había perdido dos elecciones presidenciales anteriores por un margen de votos pequeño y disputado, y gobernado la capital del país como alcalde de una manera considerada exitosa por la mayoría del público. Además, ofreció un programa de gobierno bien articulado, apoyado por otros políticos establecidos y por algunos empresarios importantes, con propuestas concretas que incluyeron ideas sobre cómo fortalecer la participación popular en la toma de decisiones del gobierno. El ascenso de Bolsonaro resultó del vacío creado por el naufragio de los principales partidos políticos y el impedimento jurídico de la candidatura de Lula. La campaña electoral que le llevó al poder se fundó más en un mensaje negativo, de odio y resentimiento, que en un programa de gobierno coherente.

Hasta cierto punto, se puede ver los acontecimientos en los dos países como ejemplos de tendencias más generales, el rechazo de clases políticas establecidas y una decepción generalizada con la democracia representativa. A fin de cuentas, los impactos económicos y sociales del capitalismo neoliberal están en el fondo del malestar, aunque, igual que las variedades del neoliberalismo, se manifiestan en grados diferentes en contextos diferentes. Se trata no solamente de un nivel de desigualdad social que dejan los principales beneficios del crecimiento económico a una clase de actores económicos muy pequeña, sino también de la precarización de las situaciones laborales de la mayoría de la población en una economía “uberizada”, junto con una percepción de que la próxima generación no disfrutará ni de movilidad social ni

³ Es importante subrayar que el triunfo de Bolsonaro no fue abrumador, ya que en el segundo turno de la elección presidencial 42 millones de brasileños no votaron por ninguno de los dos candidatos, la tasa de abstencionismo más alta desde 1989. Todos los estados del Nordeste del país, la región donde la mayoría de la población es afrodescendiente, rechazaron a Bolsonaro en favor de Haddad, y también eligieron a gobernadores del PT o de otros partidos de la izquierda y centroizquierda. Es probable que la alta tasa de abstención en otras regiones fue una consecuencia del hecho de que a Lula no le fue permitido concurrir.

de una calidad de vida mejor que sus padres, algo que afecta tanto a familias de las clases medias como a los obreros.

Las reacciones a las consecuencias socioeconómicas del neoliberalismo están mediadas por el surgimiento de resentimientos cuya base es la jerarquía de razas establecida por el colonialismo europeo. En Europa y Estados Unidos, algunos “blancos” han entrado en una crisis identitaria por sentir que han perdido su “debido lugar en el mundo” por las transformaciones económicas, echando la culpa al multiculturalismo liberal y a los inmigrantes. Otra vez hay diferencias importantes entre las formas en que los cambios sociales han nutrido resentimientos capaces de ser instrumentalizados por políticos de la ultraderecha. “La invención de la raza blanca” (Allen, 2014) tuvo distintas formas y consecuencias estructurales aun en distintas regiones de las Américas. En Brasil, el legado colonial se manifiesta principalmente en la forma como algunos segmentos de la clase media alta blanca sienten que su debida posición de privilegio dentro de las profesiones estuvo amenazada por las políticas de acción afirmativa de los gobiernos petistas. La ascensión social y política de algunos indígenas producida por el multiculturalismo neoliberal provocó una reacción semejante entre *ladinos* en Guatemala (Hale, 2006). Sin embargo, la etnografía nos muestra que los mismos argumentos en contra de las acciones afirmativas que caracterizan a algunos integrantes de las clases sociales brasileñas más acomodadas pueden salir de las bocas de aquellos residentes de las periferias urbanas que son pobres, pero de piel clara, cuando se sienten frustrados en sus propias aspiraciones de conseguir mayor movilidad social (Hita y Gledhill, 2019).

Las perspectivas etnográficas nos ayudan a entender cómo posturas “anti-políticas” y una política del resentimiento y odio pueden desarrollarse “desde abajo” en las condiciones de la vida cotidiana, en lugar de resultar simplemente de una manipulación política desde arriba por parte de fuerzas externas, aunque a menudo se trata de los dos tipos de procesos actuando simultáneamente. Sin embargo, para entender tanto las diferencias como las semejanzas entre los actuales regímenes brasileños y mexicanos es importante indagar más sobre las distintas trayectorias históricas que han conformado el desarrollo de estos países.

En el caso brasileño, se destaca la importancia de la esclavitud. En base a la esclavitud, se erigió un régimen patriarcal y autoritario, ya que los esclavizados y las esclavizadas resistían las múltiples formas de opresión, incluso culturales y sexuales, impuestas por la esclavocracia, recurriendo a todas las tácticas a su alcance a pesar de la barbaridad de los castigos aplicados (Schwartz, 2019: 28-29). Los señores de la Casa Grande establecieron una elite nacional duradera. Ofreciendo una interpretación del episodio más reciente en el largo ciclo de golpes brasileños con base en la centralidad de la esclavitud en la conformación del país, Souza (2017) argumenta que las elites económicas brasileñas aceptan gobiernos que pretendan ampliar la inclusión social y disminuir la desigualdad solamente cuando no amenazan trastornar su propio modelo de acumulación. A la

vez, insiste en que el patrimonialismo y la corrupción del régimen monárquico portugués, trasladado a Brasil durante las guerras napoleónicas, no puede ofrecer una explicación adecuada de la naturaleza de la elite contemporánea, no solamente porque la esclavitud es más fundamental, sino también porque el capitalismo neoliberal financiarizado, cuyos centros lavan el dinero de todo tipo de negocio ilegal a escala industrial, produce corrupción en todas partes.

Después de su “emancipación” tardía, los otrora esclavos y sus descendientes fueron marginados económicamente, negados sus derechos a la tierra y, en su mayoría, condenados a una vida precaria en las periferias urbanas, como consecuencia de la inmigración de nuevos trabajadores europeos y el dominio, tanto en el campo como en la ciudad, de propietarios pertenecientes a las elites blancas. El legado esclavista no solamente sigue influyendo en las posturas de los empresarios hacia los trabajadores sino también en su estrategia de acumulación de corte rentista, la cual busca maximizar ganancias a corto plazo, saqueando a la población en general por medio de tasas altas de intereses y liquidando los recursos naturales sin pensar en el futuro. Nada hace esta idea más convincente que las posturas del gobierno de Bolsonaro sobre la conservación del medio ambiente, pero su lógica más amplia estuvo presente desde los principios del golpe de 2016. Recurriendo a las tácticas de la “vieja política”, el gobierno de Temer consiguió modificar la constitución para imponer un tope de aumentos de gasto público por veinte años, una forma extrema de la austeridad neoliberal. También consiguió el apoyo de la legislatura para llevar a cabo una “reforma” radical de las leyes de trabajo, que sirvió para obligar a los trabajadores a pagar el costo de la recesión y alinear Brasil al “nuevo normal” de la caída global provocada por las soluciones neoliberales a los problemas de mantenimiento de la acumulación de capital y la “competitividad” (Streek, 2016). En la ausencia de suficientes inversiones en nuevas tecnologías capaces de aumentar la productividad, la única opción, desde el punto de vista de los capitalistas brasileños de corte rentista, fue una nueva onda de precarización de empleo, reducción de las protecciones y prestaciones que habían sido garantizadas a trabajadores con contratos formales, y más tercerización de empleo (*outsourcing*).

Una diferencia fundamental entre Brasil y México es la ausencia de una amplia reforma agraria en Brasil. El golpe militar de 1964 ocurrió cuando el último heredero del proyecto político de Gétulio Vargas, João Goulart, respaldado por un aumento de militancia en ligas campesinas y sindicatos rurales durante la década anterior, intentó reformar las relaciones laborales en las zonas rurales y empezó a hablar más sobre reforma agraria. En México, las “reformas” que resultaron del triunfo de los liberales sobre los conservadores en el siglo diecinueve transformaron las estructuras básicas de la sociedad colonial, desincorporando las propiedades de la Iglesia católica y las comunidades indígenas. Sin embargo, la conversión del “indio” en un ciudadano más vulnerable a la desposesión de sus bosques, tierras

y aguas y a la proletarización desató nuevos conflictos agrarios que la revolución de 1910-1920 no consiguió resolver definitivamente, aunque produjo una recomposición de elites más importante que la que ocurrió en Brasil.

En la segunda mitad de los años treinta una nueva etapa de reforma agraria implementada por Lázaro Cárdenas repartió las tierras de los grandes latifundios a los trabajadores rurales. A pesar del hecho de que la reforma agraria mexicana no acabó con la supeditación de los campesinos al capital, fue una de las bases principales, junto con un sistema de control de sindicatos “oficiales” que tenía mucho en común con las medidas tomadas por Vargas en Brasil, para construir y estabilizar un estado posrevolucionario caracterizado por los setenta años de mando ininterrumpido de un “partido del estado”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otro objetivo de la reforma agraria mexicana fue el de convencer a los indígenas que se identificarán como “campesinos” y se integraran en una nación cuya identidad principal sería “mestiza”. Para algunos de los arquitectos de la nueva nación posrevolucionaria, el futuro del México mestizo debía ser el de seguir los pasos de la civilización europea, y este proyecto asimilacionista fortaleció lo que Mallon (1995) llamó un “autoritarismo mestizo”. Sin embargo, ya que la reforma agraria no consiguió entregar la justicia social para todos, y el interés capitalista en explotar los recursos de los territorios indígenas aumentó vertiginosamente en la época neoliberal, la conservación de identidades indígenas y la movilización de sus comunidades en nombre de los derechos indígenas han desempeñado un papel importante en la vida política mexicana. Aunque los indígenas son una minoría (21,5%) de la población nacional, México cuenta con el número más grande de personas que se identifican como indígenas en América Latina, un número veintisiete veces mayor que la población indígena brasileña.

La ausencia de una dictadura militar en México después de la Revolución estimuló a Mario Vargas Llosa a llamar al régimen del PRI “la dictadura perfecta”. En realidad, nunca lo fue. Había límites al control disfrutado por el centro político sobre situaciones locales y regionales (Lomnitz-Adler, 1992). Un sinnúmero de conflictos sociales y políticos siempre provocaba respuestas represivas. Cárdenas consiguió poner fin a las intervenciones directas de los militares en la vida política, pero el caciquismo local y regional era una de las consecuencias de basar las relaciones entre las masas, tanto urbanas como rurales, y los políticos y líderes agrarios y sindicales, en redes de patronazgo y clientelismo, un fenómeno que no perdió su importancia después de la emergencia de mayor competitividad electoral entre distintos partidos políticos (Müller, 2016). Aunque los militares dejaron de meterse directamente en asuntos políticos, las fuerzas armadas mexicanas fueron desplegadas en guerras sucias contra la “subversión” durante la Guerra Fría de la misma manera que fueron desplegadas en Brasil, y con el mismo grado de impunidad. Sin embargo, aunque hubo bastantes fraudes electorales, el PRI no pudo bloquear la captura de la presidencia por

Vicente Fox del PAN en 2000, ni, después de un sexenio de retorno al poder, por AMLO en 2018.

Una manera de contrastar las orientaciones de los gobiernos de Bolsonaro y AMLO es en términos de sus políticas sobre las industrias petroleras nacionales. Tanto Vargas como Cárdenas vieron el petróleo como un recurso estratégico cuya producción debe ser controlada por el estado nacional y no por compañías extranjeras. A pesar de su interés general en la privatización, las administraciones neoliberales de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), dejaron la compañía estatal, Petrobras, en la condición de ser una corporación pública, con accionistas, pero también con la responsabilidad jurídica de rendir cuentas al pueblo brasileño y apoyar proyectos de interés social. A pesar de ser blanco de esquemas de corrupción, Petrobras se convirtió en un líder tecnológico mundial y la entidad dominante en la industria petrolera brasileña a pesar de la apertura del mercado a compañías extranjeras. Los gobiernos petistas iban a destinar la mayor parte de los lucros obtenidos por Petrobras por medio de la explotación de los nuevos campos petroleros de la capa pre-sal a la educación pública, para transformar esta forma de extracción de recursos naturales en una inversión para el futuro.

La compañía estatal mexicana, PEMEX, sigue disfrutando un mayor grado de monopolio tanto de la distribución como de la producción de petróleo, pero su capacidad de inversión ha sido limitada históricamente por la desviación de sus lucros al erario para sanear las cuentas públicas. También ha sido afectada negativamente bajo los auspicios de políticas neoliberales por varias formas de privatización de sus actividades secundarias y el otorgamiento de ciertos tipos de contratos a compañías extranjeras (incluyendo a Petrobras). El rescate de PEMEX como una empresa del estado nacional es uno de los objetivos principales del gobierno de AMLO. Aunque Bolsonaro se declaró en contra de añadir Petrobras a la lista de empresas estatales que su administración pretende privatizar completamente, hasta la fecha su gobierno ha continuado las políticas del gobierno de Temer, debilitando a Petrobras como empresa de una manera que beneficia a sus competidores extranjeros y a la vez disminuye su capacidad de cumplir con sus funciones sociales.

Dichas funciones han incluido el financiamiento de cooperativas y otros proyectos de pequeña escala en comunidades pobres y apoyos a todo tipo de producción cultural y artística, incluso un cine nacional destacado por su crítica social. Además de sufrir recortes de presupuesto, la Agencia Nacional del Cinema (ANCINE) ha sido un blanco de intervenciones netamente ideológicas por parte del gobierno de Bolsonaro. Cuestiones ideológicas también son claves desde el punto de vista de las políticas sociales y educativas del gobierno Bolsonaro. Por lo tanto, no se trata simplemente de la continuación y ampliación del proyecto de reestructuración económica lanzada por el golpe, sino también de proyectos que van más allá de lo que un gobierno de centroderecha hubiera promovido.

A la luz de este tipo de contrastes, podría parecer razonable plantear que el proyecto del gobierno de AMLO es el de llevar a México hacia una época “posneoliberal”⁴, pero mirando atrás a la época cardenista, mientras que el proyecto del gobierno de Bolsonaro es el de llevar a Brasil a un futuro ultraneoliberal, mirando atrás a la dictadura de Pinochet en Chile. Sin embargo, como veremos en los dos apartados siguientes, no se trata de sencillas “vueltas al pasado” en ninguno de los dos casos. Además, si, por un lado, los que critican el gobierno de AMLO lo acusan de no haber roto completamente con el neoliberalismo, por otro lado, el ultraneoliberalismo económico del gobierno de Bolsonaro se complementa con un fuerte rechazo del liberalismo social en lo que se refiere al respeto por las diferencias y al derecho a la libertad de expresión.

2. Brasil: ¿hacia la barbarie?

Aunque su propia carrera en el ejército terminó de manera controvertida, Jair Messias Bolsonaro es un fuerte defensor de la dictadura militar como una intervención necesaria para salvar al país, una de las diversas posturas que le ha llevado a promover una “rectificación” de los libros escolares. Aunque, a diferencia de Argentina, pero igual que México, los militares brasileños responsables por crímenes contra la humanidad nunca han sido procesados jurídicamente, la más importante traba impuesta sobre la vida democrática brasileña por el pacto hecho entre los políticos civiles y el poder castrense para conseguir una transición democrática fue que, bajo la nueva “constitución ciudadana” de 1988, a los militares se les otorgara el papel de “guardianes” del orden constitucional. Después de la caída de Dilma Rousseff, y en el contexto de la embestida del “lawfare” (Comaroff y Comaroff, 2007) contra el expresidente Lula, los altos mandos del ejército hicieron pronunciamientos públicos de corte político sin precedentes en la posdictadura.

Lula siguió liderando en las encuestas sobre intenciones de voto aun después de que su condena por corrupción y lavado de dinero por el juez Sérgio Moro en Curitiba, el responsable de la operación anticorrupción llamada “Lava Jato”, había sido confirmada por el tribunal de segunda instancia en Porto Alegre. Existen pocos motivos para dudar que Lula hubiera derrotado a Bolsonaro y regresado a la presidencia si su candidatura no hubiera sido bloqueada por el Tribunal Superior Electoral. La popularidad de Lula como una figura extraordinaria, un obrero nacido en la pobreza con poca educación formal que se convirtió en un estadista mundialmente respetado, transcendía la de su partido, porque en su propia persona encarnaba a un “pueblo” de “gente humilde” deseosa de conseguir ascensión social y a la vez ofrecía un proyecto político atractivo a los sectores más socialmente “progresistas” de la clase media. Por lo tanto, su eliminación del campo político fue im-

prescindible para garantizar la continuidad del proyecto económico golpista. Cuando quedó claro que solamente Bolsonaro tenía posibilidades de derrotar al candidato sustituto del PT, las elites económicas que estaban detrás del golpe no tuvieron otra opción que respaldar al candidato ultraderechista.

Consciente de su oportunidad, Bolsonaro buscó asumir el papel de continuar el proyecto económico del golpe. Diciendo que no sabía nada de economía, escogió como asesor a Paulo Guedes, un economista académico con credenciales neoliberales impecables, y también cofundador del banco de inversión BTG Pactual. Guedes, nombrado Ministro de Economía en la nueva administración, hizo su doctorado bajo la dirección de Milton Friedman en Chicago, y trabajaba como profesor en la Universidad de Chile durante la época en que los “Chicago Boys” estaban llevando a cabo el primer experimento en “terapia de choque” neoliberal como asesores del régimen dictatorial de Pinochet. En etapas anteriores de su carrera política, Bolsonaro había adoptado una postura más nacionalista sobre la economía, pero en 2018 todo lo que quedaba de esta postura fue un antagonismo inicial hacia las inversiones chinas, de pronto abandonado, y comentarios xenófobos contra inmigrantes. Vendió el fabricante de aviones nacional, Embraer, a su principal competidor estadounidense, Boeing. Es fácil identificar afinidades entre Trump y Bolsonaro (a veces llamado “el Trump tropical”). Sin embargo, sería superficial explicar las tendencias a una reorientación de Brasil hacia los Estados Unidos simplemente en términos de los protagonistas más visibles.

El “giro a la derecha” en América Latina ha sido un proceso apoyado y orquestado tanto por organizaciones civiles de la derecha estadounidense como por el gobierno de este imperio amenazado por el ascenso de China. Las redes tejidas por las organizaciones civiles estadounidenses fueron visibles en Brasil a partir de las manifestaciones callejeras de 2013. Aunque las protestas “antisistémicas” de 2013 tenían una cara izquierdista, también fueron el cuño de nuevos movimientos sociales de la derecha (Gohn, 2017). El Movimiento Brasil Libre y Vengan Para la Calle (*Vem Pra Rua*) desempeñaron un papel central en las manifestaciones que llamaron por el *impeachment* de Rousseff. El Departamento del Estado estadounidense proporcionó datos para las investigaciones de la Operación Lava Jato, después de que el juez Moro y el equipo de procuradores en Curitiba encargados de la operación fueron invitados a Estados Unidos, para familiarizarse con métodos de conseguir condenas en campañas anticorrupción, especialmente por medio de acuerdos de culpabilidad que ofrecen una sentencia más leve a aquellos acusados dispuestos a prestar declaraciones en contra de peces más gordos. En este contexto, el pez más gordo de todos fue Lula.

La sospecha de que los procesos contra Lula respondieran a motivos políticos pareció aún más plausible cuando, antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2018, Moro aceptó la invitación de Bolsonaro de asumir el liderazgo de su nuevo “Superministerio” de Justicia y Seguridad Pública. El asunto dejó de ser cosa de especulaciones cuando, con Bolsonaro ya instalado en la

⁴ Para discusiones críticas de este concepto, véase Yates y Bakker (2013) y Martin (2018).

presidencia, el periodismo en línea del *Intercept Brasil*, apoyado en seguida por el *El País*, *Folha de São Paulo* y hasta el semanario conservador *Veja*, empezó a publicar los audios filtrados de una serie de comunicaciones entre Moro y los procuradores por medio de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Los mensajes eliminaron cualquiera duda que existiera sobre el antipetismo fanático del equipo de Lava Jato y la forma en que las investigaciones buscaron criminalizar a Lula por cualquier método que fuera factible, pero a la vez proteger a los políticos que apoyaban el golpe. Revelaron un sinnúmero de violaciones de la ley y de procedimientos jurídicos por parte de los responsables de la Operación Lava Jato, sin hablar de las maneras en que los procuradores buscaron beneficiarse personalmente de la buena imagen pública que sus labores estaban produciendo. A pesar de estas pruebas contundentes, la justicia brasileña se mostró renuente a tomar medidas contra los procuradores, y, a pesar de haber violado las reglas básicas del oficio de juez, Moro no fue suficientemente desprestigiado en términos de la opinión pública para ser obligado a pedir su renuncia como ministro, sino que siguió siendo más popular que el propio presidente.

Por un lado, esta experiencia debe provocar un cuestionamiento del comportamiento de un sistema judicial destacado por los privilegios disfrutados por los jueces, que son extraordinarios en términos internacionales, y de la posibilidad de una separación de poderes efectiva cuando integrantes de las mismas familias notables dominan tanto en el campo judicial como en el campo político. A veces la Corte Suprema ha dado fallos que no gustaron al gobierno de Bolsonaro, incluyendo la clasificación de la homofobia como crimen, provocando ataques por parte de los seguidores del presidente, y presiones poco sutiles por parte del gobierno sobre algunos de sus integrantes. Sin embargo, ha hecho todo lo posible para evitar decisiones que podrían provocar una crisis política favorable al centroizquierda. Por otro lado, aunque después de los primeros nueve meses de su mandato los ciudadanos que dieron una evaluación negativa al desempeño del gobierno de Bolsonaro en sondeos de opinión pública (34%) eran más numerosos que los que lo aprobaron (31%), el nivel de aprobación tanto del mandatario como de su gobierno estaba mejorando ligeramente a principios de 2020, mientras que las fuerzas opuestas al nuevo gobierno quedaron desarticuladas y divididas. Por lo tanto, parece importante indagar más sobre la racionalidad del “núcleo duro” que sigue apoyando al régimen.

La aguda polarización dentro de la sociedad brasileña provocada por el proceso electoral se ha reproducido después de las elecciones, no solamente porque hay sectores sociales que siguen con motivos para apoyar lo que el gobierno está haciendo, sino también porque este “núcleo duro” se orienta por sus “convicciones” dentro de un ambiente de la “posverdad” que ha sido sistemáticamente cultivado por el régimen y sus promotores internacionales. Durante las elecciones, Bolsonaro cultivó una reacción “antipetista” en base al uso sistemático de las redes sociales para difundir mentiras y *fake news* (noticias falsas) contra sus adversarios. Los usuarios de

WhatsApp fueron bombardeados por una oleada de noticias e imágenes falsas que pretendían defender la idea de que Fernando Haddad y Manuela D’Ávila (su compañera de campaña como candidata a la vicepresidencia, e integrante del Partido Comunista de Brasil, PCdoB) habían promovido la homosexualidad y hasta la pedofilia en las escuelas públicas. Las mujeres que se echaron a las calles para manifestarse en contra de Bolsonaro en la campaña “#Ele Não” fueron presentadas en los medios sociales pro-Bolsonaro, en base a imágenes tomadas de otros contextos, como sexualmente promiscuas y poco higiénicas, andando por las calles desnudas sin pudor. Ya que muchos integrantes de las clases “populares” son bastante conservadores en este tipo de asuntos, estas formas de propaganda tuvieron impactos serios.

Como presidente, Bolsonaro no ha moderado su discurso, ni han disminuido los crímenes de odio que resultan de la licencia que dicho discurso ampara. Volvió a posturas homofóbicas, por medio de su cuenta de Twitter, para enfrentar las manifestaciones callejeras en su contra durante el carnaval de 2019, publicando un video pornográfico para demostrar la “depravación” de los hombres gay. Sigue atacando incansablemente tanto a las feministas como a la comunidad LGBT por “amenazar a los valores de la familia brasileña”, aunque no se le ocurrió que podría haber una reacción negativa a otro discurso en que insistió en que Brasil no podría ser un paraíso para el turismo gay, pero los hombres que vienen al país para buscar el sexo con mujeres deberían sentirse bienvenidos. El ejército digital de Bolsonaro está bajo el mando de su segundo hijo, Carlos, aunque su tercer hijo, Eduardo, tampoco tiene vergüenza en circular *fake news* de cualquier índole por medio de su cuenta de Twitter, incluyendo una foto manipulada de la joven ambientalista Greta Thunberg sentada en un tren comiendo su almuerzo con una imagen de niños hambrientos insertada en la ventana como si estuvieron presentes en la escena real. Más allá de ser un índice más de la articulación del Bolsonarismo con las redes ultraderechistas internacionales, su ejército digital de *trolls* y robots sirve para crear indefinición sobre la validez de hechos, incluyendo los resultados de investigaciones científicas sobre el cambio climático, a la vez que mantiene un clima de polarización política y moviliza a los grupos todavía dispuestos a defender al gobierno en las calles.

Es precisamente la política, o falta de política, ambiental de Bolsonaro lo que ha atraído más publicidad negativa a nivel internacional, junto con algunas sanciones por parte de gobiernos y empresas extranjeras en materia de apoyos financieros a la conservación y compras de exportaciones brasileñas. Su proyecto de abrir la selva amazónica a un nuevo proceso de “desarrollo” provocó indignación porque el aumento de la deforestación, dramáticamente señalado por el aumento de incendios forestales, representa una amenaza al ecosistema planetario. Bolsonaro respondió reivindicando el derecho de Brasil a la “soberanía nacional” contra el “colonialismo” de las críticas europeas, un discurso que se transformó en un desastre diplomático en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando el presidente insistió en que la crisis ambiental en su país era *fake*

news. Su gobierno no solamente ha aflojado las reglas jurídicas que protegían al medio ambiente, “eliminando la burocracia” asociada con la expedición de licencias ambientales a pesar del desastre tanto humano como ambiental causado por el rompimiento de una represa de relaves en Brumadinho, Minas Gerais, en enero de 2019, sino también ha reducido el número de funcionarios trabajando en las agencias responsables por la vigilancia ambiental⁵. La industria agropecuaria y la minería capitalista serán los grandes beneficiarios de este intento de retomar el proyecto del Estado militar desarrollista en Amazonas durante los años setenta, pero Bolsonaro también tiene simpatía por las personas que buscan oro y otros minerales a menor escala, los *garimpeiros*, siendo aficionado de esta actividad personalmente como una forma de recreo.

En las zonas selváticas, Bolsonaro se declaró en contra del otorgamiento de nuevos territorios a grupos indígenas y afrodescendientes (*quilombolas*), y ha creado un ambiente en que los habitantes de los territorios existentes están cada vez más amenazados por invasiones y violencia letal. El gobierno no solamente ha desmantelado las agencias responsables de su protección, nombrando a funcionarios que comparten sus ideas para dirigirlas, sino también dio una luz verde informal a los que quieren quemar el bosque e invadir los territorios indígenas. En febrero de 2020 mandó un proyecto de ley al congreso para abrir dichos territorios a la plena explotación capitalista. La deforestación en Brasil no es un problema simplemente en la selva amazónica, sino igualmente grave en la segunda región de mayor biodiversidad en Sudamérica, el Cerrado, una región que ocupa el 20% del territorio nacional en quince estados del centro-oeste.

Otro apoyo ofrecido por el gobierno de Bolsonaro a los intereses del gran capital rural es su liberación del uso de agrotóxicos, incluyendo productos prohibidos en otros países por sus impactos negativos sobre la salud pública. El gobierno no se preocupa por los niveles actuales de la contaminación de los sistemas de agua potables urbanos por agrotóxicos. Además, ha habido casos en que agricultores han desalojado a vecinos en comunidades indígenas rociando sus aldeas con agroquímicos desde el aire. La población indígena se ha movilizó colectivamente a nivel nacional para protestar, y también se han formado grupos de autodefensa locales para lidiar con los *garimpeiros* y otros invasores. Sin embargo, su capacidad de defenderse se encuentra minada por el desmantelamiento de las instituciones oficiales, en contextos en que las relaciones de parentesco, intimidad social y patronazgo entre grandes terratenientes, jueces y la policía y militares distan de ser favorables a la defensa de los derechos indígenas, ni tampoco de los de

trabajadores y pequeños productores rurales no indígenas que viven en estas zonas.

Los gobiernos petistas también tuvieron una responsabilidad por la situación que ya existe en el Amazonas. Apoyaron el megaproyecto hidroeléctrico basado en la presa de Belo Monte, cuya consecuencia ha sido no solamente un alto costo ambiental sino también humano, debido al gran desplazamiento de población desde el interior hacia la ciudad de Altamira, en el estado de Pará, acompañado por la llegada de un gran número de nuevos pobladores para trabajar en el megaproyecto. Sin embargo, la situación se ha deteriorado más bajo el mando bolsonarista. Hoy en día Altamira es un lugar en que las actividades de bandas criminales complican las vidas de los residentes de sus barrios pobres. Las peleas entre las facciones criminales por el control regional del narcotráfico provocaron una masacre en que cincuenta y ocho presos murieron en julio de 2019. Después de estos sangrientos hechos, hubo una intervención federal en Pará por orden de Sérgio Moro, cuyo resultado fue el establecimiento de un régimen de tortura, tanto de mujeres como de hombres, dentro de los presidios de la entidad, denunciado por diecisiete procuradores del Ministerio Público como abusos de derechos humanos “a escala industrial” en octubre de 2019. La respuesta de Bolsonaro a su informe fue describirlo como un “estupidez”. La respuesta de Moro fue que la investigación se basó en un “malentendido”, y que cuando los hechos fueran esclarecidos, quedaría claro que “la intervención llevó disciplina al interior de los presidios” (Betim, 2019a).

Este es solamente un ejemplo de las preocupaciones suscitadas por las políticas del gobierno de Bolsonaro en materia de derechos humanos y seguridad pública. Ya que tacha al PT socialdemócrata de “comunista”, no hay que asombrarse de que movimientos sociales brasileños más radicales, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Trabajadores sin Techo (MTST), ahora sean tachados de “terroristas”. Las políticas del PT en materia de seguridad pública también merecen ser criticadas. Los gobiernos petistas dieron poco apoyo a movimientos sociales radicales en el campo, ya que las exportaciones agrícolas y mineras fueron claves para financiar su política económica redistributiva. Tampoco se esforzaron por transformar la “limpieza social” que suele acompañar el modelo neoliberal de desarrollo urbano, ni tampoco para acabar con el escándalo de la cantidad de edificios dejados vacíos en los centros urbanos por motivos de especulación inmobiliaria (Rolnik, 2019). En lugar de medidas radicales optaron por una política de oferta de viviendas a precios accesibles, casi siempre ubicadas en la periferia urbana, por medio del programa *Mi Casa, Mi Vida*. La mayoría de estas viviendas fueron construidas por el sector privado, aunque el MTST consiguió algún acceso al programa como una “entidad social” dirigida al grupo más necesitado en términos de niveles de ingreso (Albert y Davidenko, 2018). Sin embargo, la conversión de dos movimientos sociales no violentos y dispuestos a negociar con el estado en amenazas terroristas marca un cambio profundo de política comparado con las posturas del PT.

⁵ Otra consecuencia de esta política fue la incapacidad del gobierno federal de lidiar adecuadamente con un derrame de petróleo en alta mar que causó una contaminación catastrófica de las playas y ecosistemas marinos del Nordeste del país. La sociedad civil de los estados perjudicados se vio obligada a intentar mitigar el desastre por sus propios esfuerzos, ya que el gobierno tardó en mandar soldados para ayudar, mientras que Bolsonaro solamente hablaba de un complot para frenar su subasta de nuevos campos petroleros al capital extranjero, sin visitar las zonas afectadas.

El “paquete anticrimen” elaborado por el ministro Moro se enfocó en la intensificación de estrategias represivas de seguridad pública y de encarcelación en masa con fuertes sesgos tanto de raza como de clase. Aunque el congreso hizo algunas modificaciones a la propuesta de Moro⁶, tanto en el caso de esta política como en el de la política ambiental, el tipo de “luz verde” dada por el ejecutivo tuvo efectos inmediatos, causando cada vez mayor preocupación a las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos. Aunque los primeros pasos fueron tomados por el gobierno de Temer, con la transferencia de la competencia de emitir fallos sobre casos en que militares matan a civiles desde las cortes civiles a los tribunales militares, el gobierno de Bolsonaro ha intentado reforzar las garantías de impunidad para militares y policías que matan. El gobernador del estado de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, inicialmente aliado de Bolsonaro aunque su relación con el presidente se hizo menos amistosa al final de 2019, oficializó una política de exterminio en la periferia urbana, tanto por francotiradores tirando balas desde el aire como por policías entrando en las casas donde los criminales intentaran refugiarse, sin preocuparse por los traumas causados a los residentes y los “daños colaterales”. En las favelas de Rio de Janeiro, entre el primer día de enero y el 4 de octubre 2019, murieron baleados 5 niños con menos de 12 años cumplidos, incluyendo la niña Ágatha, de 8 años, que recibió un tiro de fusil en las espaldas caminando con su madre en la calle, y 43 adolescentes con menos de 18 años. Después de la tragedia de la pequeña Ágatha, que provocó protestas dentro y fuera de la favela, policías invadieron el hospital donde la niña había sido llevada con el propósito de sacar la bala de su cuerpo, para que no fuera comprobado que salió de un fusil policial. La madre de otra víctima, una joven de 14 años muerta cuando iba a la escuela, comentó que esperaba una situación de impunidad aún peor si el paquete anticrimen de Moro era aprobado por el congreso (Betim, 2019b).

Bolsonaro también se entusiasma con la idea de que “los ciudadanos de bien” hagan “justicia” con sus propias manos. Aunque el Ministerio Público Federal interpuso un recurso, y el Senado negó aprobarlo en su forma original, Bolsonaro emitió un decreto que cumplió con su promesa de campaña de extender el derecho de portar armas de fuego a más ciudadanos, desmantelando así el Estatuto de Desarmamiento aprobado en 2003, durante la primera administración de Lula. Además, el compromiso de Bolsonaro con el principio de que “bandido bueno es bandido muerto” se ha extendido, desde el principio de su carrera política como diputado federal en Rio de Janeiro en 1988, a la aprobación pública del trabajo de exterminio llevado a cabo en la periferia urbana de la capital fluminense por los grupos paramilitares

llamados “milicias”. Abundan pruebas de relaciones directas e íntimas entre Bolsonaro y sus hijos y las milicias cariocas, incluso con los milicianos acusados de ser los autores materiales del asesinato de la concejala Marielle Franco, nacida en la favela de Maré. Las milicias conquistaron espacios antes dominados por narcotraficantes, pero se convirtieron en organizaciones criminales imponiendo prácticas de extorsión generalizada a los residentes de las favelas capturadas y metiéndose en negocios especulativos de compraventa de terrenos⁷. A veces simplemente reconfiguraron el tráfico de drogas en su propio beneficio. Las milicias siempre tenían sus patrones políticos, y, por lo tanto, con frecuencia coaccionaban el voto de los residentes por medio de amenazas de violencia (Zaluar y Barcellos, 2013). Tienen una larga historia, pero ningún otro gobierno les ha proporcionado un ambiente tan favorable.

La cara autoritaria del gobierno de Bolsonaro se manifiesta en el hecho de que el número de ministros en su gobierno que son militares, empezando por su vicepresidente, Hamilton Mourão, no tiene precedente en la posdictadura. Bolsonaro no escogió a los exmilitares debido simplemente a su reverencia por la cultura castrense. También fue un modo de evitar la selección de ministros con diferentes afiliaciones políticas y negociar cuotas de poder con sus partidos. Sin embargo, de pronto surgieron desencuentros entre los militares en el gobierno y Bolsonaro y sus hijos. El ministro Santos Cruz fue relevado de su cargo por Bolsonaro en junio de 2019, debido a su falta de simpatía con las posturas ideológicas del “gurú” intelectual del clan Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Otrora astrólogo, pero hoy en día autonombrado “filósofo”, Olavo de Carvalho es un patriota brasileño que prefiere residir en los Estados Unidos. Es un defensor de la “civilización judeocristiana” que, en un momento anterior de su vida, según su hija mayor, llevó a su familia a vivir en una comunidad esotérica musulmana, donde se aprovechó de la tolerancia de la poligamia (Segalla, 2018). Ofrece aulas virtuales en YouTube y publica libros disponibles en Amazon.com. Por lo tanto, sus ideas han tenido un impacto sobre integrantes de distintas clases sociales cuyos saberes provienen principalmente del Internet.

Santos Cruz fue sustituido por otro militar, pero el vicepresidente Mourão compartía su desprecio por Olavo de Carvalho y también fue blanco de ataques por el ejército digital bolsonarista. A diferencia de Santos Cruz, Mourão no puede ser relevado porque ocupa un cargo de elección popular. A principios de la nueva administración, Mourão hizo un esfuerzo por presentar una imagen más suave del gobierno al cuerpo diplomático extranjero, durante los periodos en que Bolsonaro estaba haciendo viajes fuera del país y el vicepresidente asumió sus responsabilidades como presidente. El comportamiento de Mourão provocó especulaciones de que estaba cultivando su propia imagen como un presidenciable más digno que el propio Bolsonaro, en caso de que el gobierno de Bolsonaro fracasara. Aunque todos los militares

⁶ Una adición que no gustó al ministro Moro fue la introducción de la figura de un “juez de garantías”, una medida que pretendió amparar los derechos de los acusados contra el tipo de colaboración entre jueces y procuradores denunciado en caso de la Operación Lava Jato, pero su implementación quedó en suspenso por tiempo indefinido por decisión del vicepresidente de la Corte Suprema, Luiz Fux, mencionado como un aliado confiable del equipo en Curitiba en las conversaciones filtradas por el *Intercept Brasil*.

⁷ El senador Flávio Bolsonaro fue acusado de participación en este tipo de transacciones inmobiliarias, las cuales le hubieran servido para lavar dinero sucio.

compartieran una visión autoritaria del ejercicio del poder, Mourão dio otra señal de que una facción dentro de sus filas no estaba totalmente conforme con la prioridad dada por Bolsonaro a los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, cuando hizo una visita propia a China, para asegurar a su vicepresidente que, a pesar de los comentarios de Bolsonaro, Brasil reconocía que China era el socio comercial más importante del país y quería mantener la relación.

Los regímenes militares brasileños y chilenos gobernaban dejando la implementación y administración de sus políticas a tecnócratas (Silva, 1991). Paulo Guedes tiene algo de este perfil, aunque también ha sido acusado de no separar sus acciones como funcionario público de sus intereses personales en el sector financiero. Causó un escándalo en el Foro Económico Mundial en Davos en 2020, cuando intentó echar la culpa por la deforestación en Amazonia a los campesinos pobres, pasando por alto las amplias pruebas en contra de actores más poderosos. Sin embargo, lo que más distingue la administración de Bolsonaro es su alto grado de ideologización. Olavo de Carvalho fue responsable por el nombramiento del ministro de relaciones exteriores, Ernesto Araújo, y del ministro de educación, Abraham Weintraub, el segundo olavista en ocupar este cargo durante el primer año de la administración. Araújo defiende la idea de que plantear una relación directa entre el cambio climático y la actividad humana es producto de una campaña global de adoctrinamiento por parte de intelectuales marxistas. Los olavistas toman una postura semejante en contra de lo que llaman la “ideología de género”. Dicen que plantear que las relaciones de sexo y género son construcciones sociales y no “hechos naturales” sirve para justificar la homosexualidad y destruir a la familia, defendiendo así una perspectiva compartida con aquellas iglesias evangélicas que apoyan a Bolsonaro, cuyos integrantes también tienen buena representación en esta administración como ministros y funcionarios. Aunque Bolsonaro solamente nombró a dos mujeres en su gabinete, una de ellas es la ministra de Derechos Humanos, Familia y Mujeres, Damara Alves. Una pastora evangélica fuertemente comprometida con el proyecto de volver a naturalizar cuestiones de género. Su política de enfatizar “la abstinencia sexual” como solución al problema del embarazo adolescente ha sido controvertida, porque muchos expertos en esta materia la consideran ineficaz, y también se ha criticado por no prestar suficiente atención a los embarazos precoces que resultan del abuso sexual de niñas.

La influencia olavista sobre el nuevo gobierno brasileño ha provocado problemas bastante serios para los que trabajan como docentes en las escuelas y universidades públicas, ya que plantea que la educación pública brasileña está contaminada por el adoctrinamiento de los alumnos por parte de docentes que difunden el “marxismo cultural”, una acusación planteada desde la óptica de teorías de conspiración a nivel internacional, pero también dirigida a la máxima figura de la docencia brasileña socialmente incluyente, Paulo Freire.

En abril de 2019, Abraham Weintraub declaró su intención de depurar el “marxismo cultural” de las insti-

tuciones de una manera “agresiva”. Apoyado por *tweets* de Bolsonaro, lanzó un ataque sobre las ciencias sociales (centrado en la sociología y la antropología), y sobre las humanidades (centrado, irónicamente, en la filosofía). El argumento principal fue que la enseñanza de estas disciplinas en las universidades públicas ofrecía poco en términos de valor al contribuyente, por su aportación a la sociedad, o a los alumnos formados en estas áreas de baja utilidad desde el punto de vista de las carreras que ofrecían. Se impusieron recortes de presupuestos salvajes sobre tres universidades, la Federal de Bahía, la Universidad Nacional de Brasilia, y la Federal Fluminense, bajo el pretexto que habían permitido “desórdenes” (*balbúrdia*) en sus instalaciones y tenían un bajo nivel de desempeño académico. Ya que fue imposible sostener el segundo cargo a la luz de sus *rankings* internacionales, y parecía que los “desórdenes” se refirieron a actos políticos amparados por el derecho constitucional a la libre expresión y por el principio de la autonomía universitaria, estos acontecimientos fueron interpretados como un intento de depurar la educación pública de toda forma de pensamiento crítico.

Sin embargo, al cabo de un tiempo se impusieron recortes de presupuesto de un 30% sobre todas las universidades federales, y el programa de becas administrado por la Capes (*Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*) fue congelado⁸. La justificación fue la necesidad de practicar la austeridad en el gasto público hasta que el congreso aprobara la “reforma” del sistema de pensiones, pero también había un impulso privatizador detrás de esta embestida contra la educación pública. Este tomó forma en otra medida del Ministerio de Educación (MEC), el proyecto *Future-se*, que busca extender el papel de “entidades sociales”, incluso empresas con fines de lucro, en el financiamiento de programas de docencia e investigación y contratación de personal dentro de las universidades públicas. *Future-se* también permitirá la transferencia del patrimonio público de la institución, incluyendo edificios, a dichas entidades. Sin embargo, otro motivo para atacar a las universidades federales en general, y los programas de ciencias sociales y humanidades en particular, sería su aportación fundamental a los programas de acciones afirmativas de los gobiernos petistas, programas rechazados por el núcleo duro bolsonarista.

La lucha ideológica es igualmente fuerte en el caso de la educación pública primaria y secundaria. Respaldado por el movimiento “Escuela sin Partido”, el régimen llamó a los alumnos a filmar a sus profesores durante sus clases con sus celulares y denunciarlos por cualquier error de “adoctrinamiento”. Los profesores, mal pagados y trabajando en instalaciones cuya infraestructura es generalmente raquítica, están enfermando por el estrés. Sus alumnos están expuestos cotidianamente a las ideas de la ultraderecha en los medios sociales, pero los profesores corren riesgos si se atreven a discutirlos críticamente en sus aulas, aunque no estén basadas en hechos ni en argumentos lógicos.

⁸ En enero de 2020, el gobierno nombró a un defensor del creacionismo presidente de la Capes.

El ataque bolsonarista a la educación pública llevó a más de un millón de profesores y estudiantes a las calles en mayo de 2019 para manifestar su rechazo a esta política. La respuesta de Bolsonaro fue tachar a los manifestantes de “idiotas útiles” manipulados por la izquierda, pero ni siquiera el MBL quedó convencido por, ni satisfecho con, ese diagnóstico. Una parte del presupuesto de las universidades federales, destinada a los gastos de operación, fue restaurado meses después, junto con parte de las becas, pero el MEC mantenía la presión sobre los universitarios imponiendo nuevas metas para evaluar sus programas, que podían acabar con la posibilidad de tener estudios de postgrado en bastantes instituciones, transformando la “cultura de auditoría” en un arma de guerra. El MEC ha buscado disminuir la autonomía universitaria interviniendo en el nombramiento de rectores, que han sido elegidos por sus colegas en la pos-dictadura. Las injerencias del MEC han causado preocupación sobre la continuidad de las investigaciones y la formación de investigadores, tanto en las ciencias naturales y aplicadas en las universidades públicas como en las ciencias sociales y humanidades. Las universidades federales han sido los principales productores de conocimiento científico en el país, y dista de ser obvio que nuevas inversiones por parte del sector privado sean adecuadas para llenar un vacío que dejaría a Brasil en una posición muy desfavorable en términos de su capacidad autónoma de beneficiarse de avances tecnológicos en lugar de volver al modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales que lo caracterizaba como periferia colonial.

El gobierno bolsonarista no solamente muestra poca preocupación por las artes y la cultura en términos de apoyo económico, sino también ha apoyado la censura de cualquier tipo de producción artística que choque con sus valores ideológicos. Estas intervenciones han provocado actos de resistencia por parte de la comunidad artística, tales como un “Festival de Verano sin Censura”, celebrado en São Paulo, y algunos fallos judiciales a favor de la libertad de expresión artística. Sin embargo, más allá de las acciones oficiales, intelectuales y artistas opuestos al proyecto ideológico bolsonarista tienen que lidiar con un clima de hostigamiento constante por parte de los seguidores del gobierno en las redes sociales. Algunos universitarios han salido del país después de recibir amenazas de muerte.

El clima de ansiedad provocado por las estrategias del régimen ha tenido un efecto desmovilizador, pero es importante indagar más sobre las formas de protagonismo en esta sociedad polarizada. Aunque las clases populares nunca fueron la base principal de Bolsonaro, se ha establecido etnográficamente que algunos residentes de comunidades pobres también creen que “el bandido bueno es el bandido muerto”, niegan que los criminales merezcan que se respeten sus “derechos humanos”, apoyan “limpiezas” llevadas a cabo por escuadrones de exterminio, y están a favor de políticas de seguridad pública estilo “mano dura”. En general, abandonan estas posturas cuando sienten que sus propios derechos como “trabajadores honestos” han sido violados por una policía que no les respeta como ciudadanos (Cardoso, 2014).

Sin embargo, la evolución de las reacciones “populares” al petismo y al bolsonarismo son complicadas, como señalé antes, al tratar de las “acciones afirmativas”. Un estudio etnográfico longitudinal realizado por Pinheiro-Machado y Scalco (2018) en Porto Alegre nos ayudará a entender en mayor detalle cómo distintos grupos de jóvenes de la periferia urbana respondieron a los cambios políticos representados por los gobiernos petistas y los regímenes de Temer y Bolsonaro.

Pinheiro-Machado y Scalco niegan que la inclusión de las clases populares en el proceso neoliberal de construcción del “yo” por medio del consumo, que resultó de las políticas petistas, llevara a una “despolitización” total, aunque aceptan que provocó mayor individualización. Su argumento es que “arreglarse bien” con ropa y gafas de sol de marca no solamente permitió a los jóvenes expresar su dignidad como individuos, sino también reforzar su indignación por seguir siendo rechazados por el resto de la sociedad como “favelados” y personas no blancas. Sin embargo, una vez que llegó la austeridad, muchos jóvenes varones condenados a volver a una vida indigna, en un ambiente social en que su seguridad física estaba amenazada en la vida cotidiana, se sintieron atraídos por las propuestas de “mano dura” de Bolsonaro y el tipo de “orden” que se comprometió a restaurar. Los que ya habían entrado en el mercado de trabajo y empezado a formar familias se mostraron menos flexibles que los adolescentes más jóvenes en sus ideas sobre cuestiones de sexualidad o refugiados, por ejemplo, y menos capaces de ser convencidos por argumentos contrarios a las posiciones bolsonaristas, aunque todos fueron expuestos a las ideas ultraderechistas en los medios sociales. Sin embargo, el factor de género desempeñó un papel importante. Muchos hombres estaban reaccionando negativamente al nuevo protagonismo femenino que se manifestó en las ocupaciones de escuelas secundarias en contra de un decreto para su reorganización emitido por la administración de Temer, y al hecho de que fuera cada vez más común que las jóvenes de la periferia urbana participaran animadamente en discusiones sobre política y cuestiones sociales en sus aulas, declarándose “feministas”. Por lo tanto, sintieron su masculinidad hegemónica amenazada, no solamente por condiciones económicas adversas sino también por la reivindicación más activa del derecho de voz femenino.

A pesar de haber mantenido un “núcleo duro” de apoyo, en el campo político la principal ventaja del Bolsonarismo en el poder ha sido la división dentro de la izquierda y centroizquierda, que persistió después de la excarcelación de Lula. Su principal problema sigue siendo su articulación con el congreso. Nadie quiere identificarse sin ambigüedad como parte de un bloque “oficialista”, y hasta los políticos evangélicos se dividen sobre qué medidas apoyarán. Además, Bolsonaro se ha enfrentado con el mismo partido del cual fue candidato presidencial. Antes de las elecciones de 2018, el PSL era un partido “enano”, principalmente orientado a la política como un negocio que da beneficios, representado en el congreso por un solo diputado. En 2018, fueron elegidos 55 diputados y 4 senadores por el PSL. Sin embargo, el partido no pudo resistir la tentación de seguir

aprovechándose de la política como negocio, nombrando a candidatos “naranjas” (*laranjas* en portugués) que no hicieron ninguna campaña con el dinero público que recibieron para sufragar sus gastos. En octubre de 2019, en medio de una investigación de la casa del presidente del PSL, el diputado Luciano Bivar, con relación al problema de los “naranjas”, estalló un conflicto entre el clan Bolsonaro y los seguidores de Bivar que dividió el PSL en dos facciones. Estaban en juego los 350 millones de reales que el PSL iba a recibir del gobierno para las próximas elecciones locales y el afán de Bolsonaro de fundar una dinastía política. Ya que Flávio Bolsonaro podía ser acusado de comportamientos ilícitos en el pasado, Bolsonaro escogió a su tercer hijo, Eduardo, como el sucesor más viable. El motivo para nombrarle embajador en Washington fue que acumulara experiencia de relaciones exteriores. Después de varios acontecimientos dignos de una telenovela, Eduardo anunció que iba a desistir de su apuesta diplomática para asumir el liderazgo del PSL en el congreso. La diputada paulista Joice Hasselmann, despedida como líder del gobierno en el congreso por Bolsonaro por no haber apoyado al nombramiento de Eduardo, prometió vengarse de todo el clan. Al final de la novela, Bolsonaro decidió fundar su propio partido.

La respuesta del ministro de economía Paulo Guedes a esta situación poco decorosa fue insistir en que el gobierno continuaría implementando con firmeza su programa de reforma ultraneoliberal, que incluía más privatizaciones y una “reforma” de los salarios y prestaciones de los servidores públicos que no tocaría a sus cúpulas civiles y militares. El senado aprobó la reforma de las pensiones en la misma semana. La reforma no fue lo que Guedes había querido originalmente, una réplica del sistema chileno de “capitalización” en que cada individuo paga sus contribuciones a una cuenta propia, sin contraparte del estado o su patrón, uno de los más criticados legados de la dictadura de Pinochet, ya que la mayoría de los chilenos llegan a la vejez sin suficientes ahorros para vivir, con pensiones que apenas alcanzan la mitad de un salario mínimo. Sin embargo, aun después de las enmiendas hechas a la propuesta original en el congreso, el cambio de las edades de jubilación realizará un ahorro fiscal importante, y Guedes tenía confianza en obtener el apoyo del congreso para el grueso del resto de su programa.

No obstante, los problemas experimentados durante sus primeros meses de la gestión bolsonarista animaron al congreso a imponer un mayor control sobre los gastos y metas fiscales del gobierno, provocando una discusión sobre la oportunidad de cambiar el sistema político desde un modelo presidencial hacia un modelo más parlamentario, la misma estrategia adoptada para impedir la gestión de João Goulart antes del golpe de 1964. El “núcleo duro” bolsonarista reaccionó soñando con un “autogolpe” que cerraría el congreso. Mientras tanto, los vecinos chilenos finalmente perdieron su paciencia con un modelo de desarrollo ultraneoliberal cuyo “éxito” en términos macroeconómicos no dejó contentos a diversos sectores de la sociedad, y la vuelta del peronismo al poder en Argentina provocó reacciones poco diplomáticas por parte de Bolsonaro y Araújo.

3. México: ¿hacia una cuarta transformación?

Durante su campaña electoral, AMLO se comprometió a producir un cambio profundo en su país, a la altura de las tres transformaciones clave en su historia anterior: la Independencia, La Reforma Liberal, y la Revolución de 1910. Dijo que iba a llevar a cabo “la cuarta transformación de la vida pública de México”, pero esta vez sin la violencia que acompañó a las transformaciones anteriores, ya que sería “ordenada pero radical”. Para muchos, esta meta parecía bastante ambiciosa para un mandato que solamente duraría seis años, ya que la constitución mexicana no permite la reelección, y tal vez indicio de la personalidad “mesianica” de AMLO (Grayson, 2007). Uno de los retos principales que el nuevo gobierno tuvo que enfrentar fue el espantoso nivel de violencia en el país, no solamente la violencia del crimen organizado, sino también la de feminicidios y asesinatos de periodistas. Las tasas de homicidios se elevaron durante el sexenio anterior, y siguieron haciéndolo después de que AMLO asumiera la presidencia. Un segundo problema importante fue la reactivación de una economía mexicana cuya modesta tasa de crecimiento traía pocos beneficios a la mayoría de la población, un problema agravado por las políticas proteccionistas de Trump.

En lo que se refería a un tercer reto, el problema de la corrupción endémica en la vida pública mexicana, AMLO tenía un plan de acción ya definido, inspirado en “la austeridad republicana” de su héroe personal de la segunda transformación, Benito Juárez. Juárez, gran defensor de la nación en la guerra contra los invasores franceses y del estado laico, nació pobre en una comunidad indígena zapoteca en Oaxaca. Sin embargo, no solamente prefería olvidarse de su origen indígena sino también, siendo un liberal del siglo diecinueve, quería acabar con sus comunidades corporativas y transformar a los indígenas en “ciudadanos iguales ante la ley”, aunque quedara para los gobiernos revolucionarios que surgieron de la tercera transformación la tarea de lanzar un programa sistemático de “mexicanizar al indio”. Los indígenas que sobrevivieron a los procesos de “desindianización” liberales y revolucionarios (Bonfil, 1990) fueron numerosos. Aprovechándose de cambios en el ambiente internacional, finalmente derrocaron al “indigenismo oficial” para reivindicar sus derechos tanto territoriales como culturales, en el caso de los movimientos más radicales bajo la bandera de la “autonomía indígena”. Por lo tanto, el esquema histórico de AMLO tal vez no se conforme a una visión indígena de la historia mexicana ni se muestre suficientemente sensible a los puntos de vista indígenas.

Sin embargo, tanto con respecto a los indígenas como en muchos otros asuntos, sería difícil encontrar dos políticos tan distintos en su lenguaje político como AMLO y Bolsonaro. Como Herzfeld (2019) ha observado, el rechazo de la “corrección política” es un rasgo común de los discursos de políticos de la ultraderecha contemporánea, pero la falta de “corrección política” de Bolsonaro es especialmente brutal. A diferencia de Bolsonaro, AMLO muestra respeto por todas las causas socialmente liberales y por el multiculturalismo, transformado en una política oficial del estado mexicano,

aunque en su modalidad neoliberal (Hale, 2006) y por motivos políticos considerados cínicos, por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992. Replicando el discurso conciliador de Lula en Brasil a principios de su primer mandato en 2002, a López Obrador le gusta hablar de “paz y amor”, tanto con respecto a sus relaciones con el gobierno de Donald Trump como con respecto a sus relaciones con los empresarios de su país. Sin embargo, igual que Bolsonaro, AMLO ha definido su postura política en términos del combate a un “enemigo”, nombrándolo “la mafia del poder”.

A veces, AMLO ha dado caras y nombres a los integrantes de dicha “mafia”. Por ejemplo, durante la campaña electoral en 2011 que al final resultó en la derrota de López Obrador por Enrique Peña Nieto y el regreso al poder del PRI, AMLO hablaba de un grupo encabezado por el expresidente priísta Carlos Salinas (1988-1994), que incluía a algunos de los empresarios más ricos del país, y al expresidente panista Vicente Fox (2000-2006). Ya que el gobierno de Peña Nieto fue desprestigiado por una serie de escándalos relacionados con las íntimas relaciones con un grupo de empresarios mexicanos favorecidos por el presidente y con los tratos oscuros que involucran a empresas extranjeras, notablemente la española OHL y la brasileña Odebrecht, el mismo tipo de discurso pudo repetirse en 2018 con todos sus términos.

Sin embargo, a veces este “enemigo” es más amplio y difuso, cuando López Obrador se refiere a todas las formas en que los puestos oficiales del país y sus presupuestos han sido secuestrados para fines privados y/o políticos. Además, no es por casualidad que los discursos de AMLO suelen sugerir una relación entre la formación de la “mafia del poder”, encabezada por Salinas, y la obra principal del sexenio de Salinas, la transición desde un estado desarrollista en que el gobierno pretendía dirigir la economía y las empresas públicas desempeñaban un papel estratégico hacia un régimen neoliberal. Por lo tanto, AMLO también define el “neoliberalismo” como “enemigo”, pero uno de los aspectos interesantes de su administración es que la austeridad en las finanzas públicas, normalmente considerada una política neoliberal, es un elemento clave de lo que pretende ser una estrategia de desarrollo nacional alternativo.

La diferencia entre el modelo de “austeridad republicana” de AMLO y el modelo neoliberal es que pretende liberar recursos para los servicios públicos y programas sociales que beneficiarán a las capas populares de la sociedad por medio de reducciones de gastos innecesarios que no benefician a la mayoría de la población. López Obrador siempre ha practicado la austeridad en su vida personal, viviendo en casas modestas y manejando coches viejos y corrientes. Como presidente, viaja en vuelos regulares en clase turista en lugar de usar el lujoso avión oficial de Peña Nieto, el cual intentó vender para contribuir al financiamiento de sus programas sociales. Convirtió la residencia presidencial oficial, Los Pinos, en un museo abierto al público. Más allá de estos actos simbólicos, lanzó un ataque sobre los altos salarios y prestaciones disfrutados por los cuadros directivos del funcionariado público y las jubilaciones muy generosas disfrutadas por sus antecesores. El primer enfrentamiento

entre el nuevo presidente y los otros dos poderes del estado constitucional resultó de su intento de bajar los salarios de los jueces de la Corte Suprema.

La “austeridad republicana” pareció bien a la mayoría del público, pero el asunto se complicó porque la nueva administración se planteó otros recortes de gasto público, incluso de las ayudas a organizaciones no gubernamentales. Aunque el gobierno dio un paso atrás parcial después de ser criticado por perjudicar al trabajo de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y al apoyo de víctimas de violencia, sobre todo mujeres, quedó la sospecha de que se trataba no solamente de economizar y acabar con relaciones entre organizaciones civiles y el estado que no traían beneficios reales para la sociedad, y que podían verse contaminadas por la corrupción, sino también un afán de fortalecer el poder del ejecutivo. Además, el afán de la nueva administración por reducir el gasto público fue más allá de poner topes en los salarios de los altos funcionarios y despedir a funcionarios de menor importancia, que pudieran ser considerados supernumerarios o “empleados de confianza”, contratados por motivos de nepotismo o según la lógica clientelar de “acomodar a amigos y arrimados”. Aunque hay diferencias importantes entre el tipo de austeridad que Guedes pretende imponer sobre los trabajadores del sector público brasileño y la “austeridad republicana” de AMLO, algunos ministerios decidieron no gastar todo su presupuesto disponible, causando perjuicios a servicios públicos ya en una condición raquítica, especialmente al sector de salud⁹.

No se puede decir que AMLO sea autoritario en el mismo sentido que Bolsonaro. Se declara comprometido con la plena libertad de expresión y dice que el debate es saludable. Sin embargo, al insistir que siempre defenderá su derecho de réplica a los medios que le critican, se refiere a “la prensa fifi”, una referencia histórica a los periódicos de corte conservador que agredieron al primer presidente de la época revolucionaria, Francisco Madero, abogaron por un golpe de estado militar, y hablaron por las elites que festejaron su asesinato. Esta es una postura delicada en un país en donde ser periodista es una actividad sumamente peligrosa, y el periódico conservador que ha sido el blanco principal de los ataques de AMLO, *Reforma*, siempre se ha destacado por sus reportajes sobre la corrupción y la impunidad. El presidente tiene amplias oportunidades de vender sus políticas, ya que ofrece una conferencia de prensa televisada cada mañana, que a veces parece similar a un sermón ofrecido por un pastor evangélico. Sin embargo, tal vez tenga razón en pedir que la “prensa fifi” analice detalladamente por qué las políticas neoliberales que recomendaba no dieron los resultados previstos. En este sentido, la presidencia de AMLO está provocando aquel

⁹ Ha sido difícil realizar el objetivo del nuevo gobierno de ofrecer servicios de salud gratuitos y de calidad a las capas más pobres de la sociedad que no tienen seguro social, no solamente por causa de limitaciones de presupuesto, sino también por causa de la precarización de las situaciones laborales de los médicos y otros trabajadores en el sector de salud provocada por las políticas neoliberales de administraciones anteriores. Además, muchos médicos se niegan a trabajar en zonas rurales marginadas por causa de las amenazas a su seguridad personal presentadas por bandas criminales.

tipo de debate público racional, relevante, e incluyente de distintos puntos de vista, que la política del odio y el cultivo de la “posverdad” han impedido en Brasil.

Sin embargo, a pesar de terminar los primeros cien días de su mandato con el nivel de aprobación más alto en la historia (al revés de la trayectoria de Bolsonaro), AMLO ha tenido que enfrentar bastantes controversias. La reactivación del sector petrolero es uno de los elementos centrales de su plan de gobierno. En el momento que el nuevo mandatario asumió la presidencia, Pemex vivía su peor crisis de producción en cuarenta años, y el plan también proponía rehabilitar sus seis refinerías existentes y construir una nueva, en Tabasco. La propuesta de transformar México por medio de la transformación de Pemex es controvertida por varios motivos. Aunque hay una clara justificación económica y estratégica para intentar recuperar la autosuficiencia energética y dejar de importar gasolina, el gobierno de AMLO está navegando contra la corriente en muchos otros países por privilegiar en lugar de reducir el uso de energías fósiles. El cambio climático es un factor importante en el aumento de migración rural-urbano e internacional en Mesoamérica, junto con los daños directos a la producción campesina que provocan los impactos ambientales de la extracción de hidrocarburos y minerales, y el acaparamiento de tierras por empresas agroexportadoras. El otro factor clave que está tras la migración desde Centroamérica, la violencia y extorción por parte de grupos criminales, también se alimenta de este modelo de desarrollo extractivista.

López Obrador consiguió el apoyo de tres bancos internacionales, JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities, para refinanciar la deuda de PEMEX, insistiendo en que no se trata de contratar deuda nueva, sino simplemente una extensión de los plazos de un fondo ya existente, y cambió la política fiscal de “ordeñar” la empresa en perjuicio de su rentabilidad y capacidad de invertir. De esta manera, PEMEX podría recuperarse como empresa estatal de una manera que recibiría una buena acogida por parte de “los mercados”. Al mismo tiempo, AMLO tomó medidas para acabar con los robos de gasolina de los ductos de PEMEX, el *huachicoleo*, por parte de grupos criminales. El aspecto más positivo de este operativo fue las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que “siguieron el dinero” en su proceso de lavado, identificando redes que involucraban no solamente a funcionarios corruptos de PEMEX, sino también a políticos y empresarios, pero los operativos de policías y militares para cerrar los ductos no tuvieron éxito totalmente, ya que 73 personas murieron en una explosión cuando los agentes no dispersaron a una multitud que había llegado para recoger combustible gratuito de una toma clandestina en Hidalgo. Los *huachicoleros* reaccionaron a los operativos con violencia, usando masacres en bares para sembrar miedo. Sin embargo, aunque el operativo provocó una crisis de desabastecimiento en diez estados en donde el gobierno cerró los ductos durante varias semanas, al final redujo el robo de combustible diario desde 56 mil barriles a 8 mil. A pesar de este éxito, después de cinco meses en el poder, AMLO reconoció que los avances conseguidos por su administración en ma-

teria de seguridad pública fueron todavía “marginales”, y al cabo de poco tiempo los grupos criminales estaban metiéndose en el aún más peligroso negocio de robos de gas de los ductos.

AMLO siempre ha apoyado el argumento de que el uso de violencia represiva para frenar la violencia de los carteles solamente provoca más violencia. Al comienzo de su administración experimentó con “diálogos por la paz, la verdad y la justicia” dirigidos a los familiares de las víctimas de la violencia, aunque pocos de ellos quedaron contentos con un proceso que no pretendía identificar y castigar a los responsables por las muertes o desaparición de sus seres queridos. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, el nuevo gobierno optó por la vía de la militarización de la seguridad interna del país. No fue exactamente la misma vía que la política de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. AMLO pretendió crear una nueva Guardia Nacional que substituiría a las fuerzas castrenses ya empleadas directamente en estas tareas. Jurídicamente sería una organización civil, con la participación de algunos oficiales con formación militar, pero, supuestamente, dotados de una capacitación que garantizaría el respeto a los derechos humanos y mayor habilidad en el uso moderado de la fuerza. Sin embargo, sigue siendo una respuesta militarizada contra el crimen organizado. Ya que tanto la capacitación de los elementos de la nueva corporación como la construcción de la infraestructura para su despliegue en todo el territorio nacional iba a llevar tiempo, el gobierno de AMLO tuvo que recurrir a las fuerzas armadas convencionales para lidiar con situaciones de crisis, incluso una crisis en el centro de detención de migrantes y refugiados en Tapachula, Chiapas, provocada por su hacinamiento.

Desde el principio de la administración de AMLO, las políticas inhumanas de Trump agravaron los problemas provocados por México con la llegada de cada vez más personas en la frontera sur del país, no solamente desde América Latina, sino también desde África y el Caribe, ya que su entrada a los Estados Unidos por medio de la frontera norte, aun como refugiados, se había visto seriamente impedida. AMLO prometió ofrecer una respuesta humanitaria al problema de ser responsabilizado por el bienestar de personas que habían sido vulnerables a todo tipo de abuso dentro de México, tanto por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas como por parte de organizaciones criminales. Se comprometió a ofrecer mayores posibilidades de conseguir permisos para trabajar en México, pero este compromiso animó a más migrantes cubanos y africanos a probar su suerte cruzando por la frontera sur. Además, la posibilidad de seguir con estas políticas más humanitarias fue bloqueada por el siguiente paso en la estrategia de Trump, la amenaza de imponer mayores aranceles sobre las exportaciones mexicanas si México no hacía mayores esfuerzos para detener a los migrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos, y si no aceptaba hospedar a los refugiados en territorio mexicano mientras que sus solicitudes de asilo esperaban a ser procesadas por la justicia norteamericana.

Las consecuencias de la capitulación del gobierno mexicano a las amenazas de Trump han sido catastró-

ficas. Los que quedan atrapados en ciudades fronterizas en el norte de México, que ni son lugares seguros para ciudadanos mexicanos, viven con el riesgo cotidiano de ser secuestrados por el crimen organizado. Una parte importante de la flamante Guardia Nacional está dedicada a la vigilancia de la frontera sur. Siendo todavía una fuerza predominantemente castrense, sus persecuciones de indocumentados, junto con su trato de personas que tienen derecho de estar en el país bajo los programas de López Obrador, han sido denunciados tanto por su racismo como por sus violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual y maltrato de menores. Aunque los centros de detención siguen siendo centros de abuso de las personas internadas en ellos, las autoridades pusieron cada vez más énfasis en la deportación como solución a sus dilemas. Desde la perspectiva de las dos fronteras de México, se podría decir que el gobierno de AMLO ha construido el muro fronterizo de Donald Trump en el sur de su propio país, y que el contribuyente mexicano sí está pagando la cuenta.

En sondeos de opinión pública, la gran mayoría de los mexicanos se expresan más preocupados por la cuestión de la seguridad pública que por la cuestión de la economía. La reorganización de las agencias responsables de la seguridad pública por el gobierno lopezobradista provocó una confrontación con elementos de la policía federal en torno a la sustitución de esta corporación por la Guardia Nacional, pero al final de 2019 ni la nueva corporación ni el ejército habían conseguido detener el aumento de homicidios ni nuevas manifestaciones del poder de los carteles, la más espectacular de las cuales fue el fracasado operativo en Culiacán contra uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán. Repitiendo el lema de que su política es una política de “abrazos” en lugar de balas, AMLO respondió a un despliegue de sicarios en las calles de un tamaño que obligó a la policía y militares a retirarse, diciendo que la protección de las vidas de civiles inocentes fue la prioridad de su gobierno. Sin embargo, es importante indagar sobre lo que hubo detrás de este acontecimiento y otros, como la masacre de policías estatales por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán, y la matanza cometida días después por fuerzas de seguridad pública en una zona del estado de Guerrero disputada entre grupos de narcotraficantes distintos.

Primero, tenemos las consecuencias de la fragmentación de carteles provocada por las políticas de seguridad pública de las administraciones anteriores y el surgimiento de grupos de autodefensa locales, algunos de los cuales también se convirtieron en grupos criminales bajo los auspicios de funcionarios federales y estatales (Gledhill, 2016; Maldonado, 2018). Aunque el CJNG está extendiendo su hegemonía, lo que existe en las regiones todavía disputadas por distintos grupos de actores poderosamente armados es una dinámica de alianzas y traiciones inestables, en que incluso los grupos locales que se formaron principalmente para ayudar a sus paisanos a vivir un poco más tranquilamente pueden cambiar de lealtades por motivos pragmáticos, haciendo una distinción entre “buenos” y “malos” demasiado simplista. Segundo, tenemos el problema de que el crimen sigue

penetrando y sobornando el aparato del estado a nivel local y regional. Esto se debe no solamente a la corrupción política, sino a la capacidad de coacción acumulada por los carteles. El problema va más allá de su capacidad de recurrir a la violencia, que incluye amenazas a funcionarios públicos y a sus familias si no quisieran “colaborar”, y está fortalecida por la falta de una política seria de control del tráfico transfronterizo de armas por parte de las autoridades estadounidenses. El peso económico de las ya muy diversificadas actividades del crimen organizado, bien incrustado en el sector financiero por medio del lavado de dinero e inversiones “legítimas”, y disfrutando de dimensiones transnacionales, dificultaría el control que cualquier gobierno pudiera ejercer sobre todo el aparato teóricamente bajo su mando, incluso el militar.

Esta observación nos lleva a dos sentidos en que se podría pensar en una conexión entre el capitalismo neoliberal y las organizaciones criminales, uno por medio de las relaciones que se han desarrollado entre las empresas “ilegales” y “legales” dentro del marco de la globalización y la desregularización (Nordstrom, 2000), y el otro por medio de los impactos sociales y económicos del neoliberalismo, cuya “destrucción creativa” sigue produciendo altos grados de desigualdad a la vez que reconfirma las subjetividades aún de los más pobres para que anhelan “participar” en el mercado de consumo. Los que buscan “una vida mejor” por medio de su participación en las actividades ilegales corren altos riesgos, tanto de muerte prematura como de encarcelamiento. Sin embargo, siguen existiendo contextos en que “los apoyos” ofrecidos por organizaciones criminales tanto a la infraestructura social como a los individuos necesitados, a cambio de la aceptación silenciosa de una “protección” que casi siempre tiene sus propias dimensiones de abuso, parecen la mejor opción porque la economía oficial no ofrece alternativas.

Reconociendo esta realidad, un eje central de la estrategia de AMLO para frenar la violencia y criminalidad ha sido el de crear más oportunidades para conseguir empleos dignos dentro de proyectos que pretenden dinamizar las economías de las zonas con menos ventajas del país. Sin embargo, el entusiasmo de AMLO por ciertos tipos de megaproyectos económicos fue otro de los aspectos más criticados de su mandato desde el principio, aunque empezó con la cancelación del megaproyecto más importante de la administración anterior. A pesar de las protestas de los grupos empresariales favorecidos por la administración priísta con los jugosos contratos para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en terrenos del Estado de México, ya disputados por muchos años con un movimiento local de agricultores campesinos, AMLO consiguió cancelar el proyecto a medio camino, por medio de una de las “consultas populares” que introdujo para fortalecer su capacidad de mando y legitimar su uso habitual de decretos presidenciales (una práctica que tiene en común con Bolsonaro). Aunque siempre había dudas técnicas sobre la viabilidad de su proyecto alternativo de aumentar la capacidad de una base aérea militar existente, en este caso no hubo mucha controversia sobre la consulta

original, aunque el gobierno no ha permitido tanta discusión sobre los impactos ambientales y sociales en el caso de su propio proyecto. Sin embargo, otras consultas han provocado mayor controversia.

El Consejo Nacional Indígena (CNI), que integra el movimiento zapatista y otros movimientos sociales indígenas radicales, niega rotundamente que el gobierno de AMLO represente una ruptura con el sistema político mexicano establecido, insistiendo en que las consultas son una simulación para imponer decisiones ya tomadas que distan de conformarse con las normas establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo para realizar consultas “libres e informadas”. Desde el punto de vista del CNI, AMLO manipuló las consultas para impulsar los mismos tipos de megaproyectos energéticos, extractivistas y turísticos que los gobiernos neoliberales, trayendo más despojo y envenenamiento de tierras, mayor deforestación, mayor pobreza, y mayor división y confrontación a las comunidades indígenas que son las principales perjudicadas. Un caso destacado fue el de la termoeléctrica de Huexca en el estado de Morelos, que contaba con la oposición tanto de ecologistas como de indígenas. Los ciudadanos descontentos insistieron en que AMLO se había comprometido a cancelar este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad durante su campaña, pero él insistió en seguir con una consulta a pesar del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, un indígena nahua, que también militó en contra del megaproyecto regional lopezobradista más ambicioso, el Proyecto Integral Morelos. Desde el punto de vista de los críticos indígenas, cuando el engaño no es suficiente para acabar con la resistencia, AMLO recurre a la militarización.

Se puede decir que el gobierno de AMLO está volviendo a las ideas de desarrollo integral regional de épocas anteriores, aunque ya con una participación importante del sector privado, nacional y transnacional. La diferencia es su postura discursiva conciliadora hacia los movimientos indígenas radicales. Los zapatistas y otras organizaciones indígenas regionales se mantienen firmes en su oposición al megaproyecto turístico del Tren Maya. AMLO dice que respeta su rechazo al proyecto (sin tener ninguna intención de abandonarlo) y nunca se olvida de mandar sus saludos a los “compañeros” de todos los movimientos sociales. Sin embargo, otros aspectos de sus discursos tal vez sean más reveladores. El programa “Sembrando Vida” pretende generar empleo en Chiapas plantando árboles frutales a gran escala. Tanto por motivos ecológicos como por motivos sociales, parece un proyecto bien adaptado a las necesidades de la población rural de la región. Sin embargo, en una gira por la región beneficiada, el presidente sintió la necesidad de urgir a los beneficiarios del programa a no perder tiempo en la hamaca o en consumir bebidas alcohólicas. No pensaba prohibir la venta de alcohol, algo hecho por algunas comunidades indígenas “autónomas” y en comunidades campesinas “revolucionarias” en el pasado, pero dijo que “los cristianos no luchan en la hamaca” (Muñoz, 2019). En este discurso se ve muy claramente cómo las ideas de AMLO se fundan en su espíritu evangélico. AMLO sin lugar a dudas es un cristiano ejem-

plar. Sin embargo, empezó su carrera trabajando como funcionario público en el ya extinto Instituto Nacional Indígena, el instrumento secular, pero misionario, de la política asimilista del estado posrevolucionario. Sus motivos para escoger este camino fueron nobles, pero hasta hoy sus palabras siguen, inconscientemente, reproduciendo el “autoritarismo mestizo”, que estaba detrás de la segunda y la tercera transformación de México, en una cuarta transformación que pretende cambiar una sociedad radicalmente transformada, social y económicamente, por el neoliberalismo.

4. Conclusión: el laberinto neoliberal y el pasado en el presente

Este análisis ha señalado cómo los legados de sus historias particulares, colonial y poscolonial, siguen influyendo en el presente de Brasil y México. En el caso de Brasil, podríamos concluir que se trata principalmente de procesos de regresión en términos de derechos humanos y derechos sociales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, e incluso la vida democrática y republicana, bajo el mandato de Bolsonaro. A pesar de las múltiples contradicciones ya esbozadas, la administración de AMLO parece más positiva en términos de los mismos criterios. Sin embargo, dejando a un lado por el momento la cuestión de la continuidad de elementos del modelo de desarrollo neoliberal en la “cuarta transformación”, una comparación entre las vidas políticas bajo los dos nuevos regímenes sugiere que existen algunas semejanzas entre ellos, a la vez que hay diferencias importantes que destacaré al final de esta discusión.

Su estilo populista de hacer la política permitió a AMLO construir una amplia base de apoyo popular, a pesar de ser rechazado por movimientos sociales radicales, pero este político hábil también consiguió aprovecharse de la desarticulación de las redes de patronazgo de los otros partidos, todos desprestigiados por su corrupción e incapacidad de mejorar la situación económica y lidiar con los problemas de violencia e inseguridad. Tanto MORENA como el partido en que AMLO había militado antes, el PRD, fueron movimientos contruidos por la captura de muchas redes políticas regionales existentes, incluso un número de cacicazgos sin caras “progresistas”. A veces esta estrategia pragmática, orientada al objetivo de ganar elecciones, provocaba disputas dentro de las filas del MORENA cuando AMLO no se decantó por figuras locales más “progresistas” y con largas historias de militancia. Un año después de su triunfo nacional, las elecciones internas dentro del partido del presidente estaban provocando luchas no muy diferentes a las del PSL brasileño. A largo plazo, la estrategia de aglutinar fuerzas ideológicamente heterogéneas para ganar elecciones sigue imponiendo límites sobre las posibilidades de transformar el sistema político, por no acabar con las relaciones clientelares y la construcción de camarillas. Además, aunque tanto el congreso como el ejecutivo ya tenga una cara más centroizquierdista, AMLO ha conseguido incluir a figuras religiosas y empresarios más socialmente conservadores, algunos har-

tos de la ineficiencia y corrupción de la clase política establecida, pero otros pensando más en cómo conservar los beneficios de sus empresas dentro de la nueva configuración de fuerzas.

No cabe duda de que el sistema parlamentario brasileño también necesita reforma. Aparte del problema de los partidos “enanos”, los grandes partidos establecidos, especialmente el MDB, son máquinas electorales cuyos “caciques” determinan los nombramientos de candidatos y funcionarios públicos precisamente en base al principio de “toma y daca”, una práctica tampoco ajena al clan Bolsonaro. La negativa del congreso al plan de transferir el control del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) desde el Ministerio de Economía al Ministro de Justicia encabezado por Moro fue motivado por un deseo de reducir los riesgos de investigaciones más rigurosas sobre corrupción en sus propias filas. Sin embargo, los “autogolpes” presidenciales en América Latina tampoco han resultado en una vida política más limpia, como demuestra el caso del autogolpe de Fujimori en el Perú, cuya motivación fue eliminar obstáculos a la implantación de su programa de “terapia de choque” neoliberal.

La reproducción del neoliberalismo en México va más allá de los megaproyectos, y tal vez el neoliberalismo fue la verdadera “cuarta transformación” mexicana. La implantación de las técnicas neoliberales para reglamentar la conducta de ciudadanos dentro de una sociedad del mercado promueve al menos un debilitamiento parcial de la solidaridad colectiva y transformaciones individualistas de la persona social. Así sirve a los fines de un capitalismo financiero que produce beneficios a partir de inversiones especulativas en cualquier tipo de bienes, incluyendo el endeudamiento de las capas más vulnerables de la sociedad, al lado de la economía “real” de bienes y servicios dominada por grandes corporaciones (Dardot y Laval, 2014: 325). Tanto en Brasil como en México, el capitalismo sigue encontrando resistencias colectivas y populares, pero es difícil escapar por completo el laberinto neoliberal, como señalan Bruce Kapferer y Marina Gold (2018: 43) cuando escriben que hasta los pobres han sido llamados a las filas de la sociedad de mercado.

Esto fue precisamente lo que hicieron los gobiernos petistas en Brasil cuando facilitaron crédito barato para ayudar a los residentes de favelas a mejorar sus niveles de consumo. Sus motivos fueron nobles, los de mejorar la calidad de vida de familias pobres que ya pudieron comprar una refrigeradora, más una necesidad que un lujo en un país tropical. La popularidad en las favelas de las iglesias evangélicas que predicaban una “teología de la prosperidad” indica que muchos querían ser llamados a filas de antemano. Todo andaba bien, antes del desplome de la demanda mundial para las exportaciones que sustentaban su modelo económico redistributivo, en un contexto en

que las acciones afirmativas del gobierno promovieron el ascenso social de la siguiente generación.

El caso de Brasil nos demuestra cómo el rechazo popular de las clases políticas puede producir manifestaciones callejeras que respaldan el liberalismo económico y rechazan el liberalismo social, aun cuando muchos participantes tengan posturas más ambiguas en sus vidas cotidianas. El hecho de que otros movimientos semejantes expresen un repudio del capitalismo neoliberal podría enfocarnos en las consecuencias de las tecnologías digitales, cuya manipulación desempeñó un papel central en el avance de la ultraderecha en Brasil, al tiempo que sirven como una herramienta para movilizar movimientos anti-sistémicos. Sin embargo, los distintos papeles desempeñados por las nuevas tecnologías en contextos diferentes solamente pueden ser entendidos en términos de las condiciones contemporáneas e históricas que conforman cada contexto. Por lo tanto, es imprescindible pensar en las causas sociales más profundas que están tras el crecimiento en diferentes regiones de procesos de movilización, disconformidad y polarización que son semejantes en términos de sus formas de expresarse, pero diferentes en términos de contenido. Como Streeck (2016) ha planteado, ya que la reestructuración neoliberal de la economía y las técnicas neoliberales de administrar la sociedad no han sido capaces de estabilizar el sistema, tendencias autoritarias de un tipo u otro existen en todos los intentos de lidiar con las contradicciones de la actual etapa del desarrollo capitalista, incluso en el caso de China, cuyo estado autoritario pretende perfeccionar un sistema de vigilancia total de sus ciudadanos. Aun si dichas medidas siguen siendo incapaces de estabilizar el sistema de una manera duradera, estamos en un periodo de gran incertidumbre. Las izquierdas socialdemócratas que abogan por una sociedad menos desigual no han conseguido definir una alternativa económica coherente, porque han temido las consecuencias electorales de proponer medidas radicales contra la concentración de riqueza y la financiarización. Por lo tanto, no consiguen ejercer un liderazgo moral e intelectual, la hegemonía en el sentido gramsciano, sobre movimientos de protesta espontáneos, horizontales y plurales que no comparten una sola visión.

Sin embargo, las organizaciones conservadoras estadounidenses que patrocinaron el “giro a la derecha” en América Latina ni consideran la democracia social inclusiva compatible con la gerencia eficaz de una economía capitalista. El hecho de que ni los gobiernos del PT ni el gobierno de AMLO hayan ofrecido salidas definitivas del laberinto neoliberal, ni tampoco de “la vieja política”, tal vez sea menos importante que el hecho de que han representado una alternativa a la barbarie, defendiendo espacios para la libertad de expresión y la tolerancia, a la vez que han pretendido aliviar la pobreza y desigualdad.

5. Referencias bibliográficas

- Albert, Victor; Davidenko, Maria (2018). “Justification work: the homeless workers’ movement and the pragmatic sociology of dissent in Brazil’s crisis”. *European Journal of Cultural and Political Sociology* 5(1–2): 194–217. doi:10.1080/23254823.2018.1452622.
- Allen, Theodore W. (2014). *The invention of the white race, volume 2: The origin of racial oppression in Anglo-America*. London & New York: Verso Books.
- Betim, Felipe (2019a). “O escândalo de tortura no Pará que Bolsonaro e Moro consideram “besteira” e “mal-entendido”. *El País*, 8 de octubre de 2019, https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/08/politica/1570570500_263393.html, acceso 08/10/2019.
- Betim, Felipe (2019b). “Ciclo de impunidade em operações policiais com mortes ronda o caso Ágatha”. *El País*, 10 de octubre de 2019, https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html, acceso 10/10/2019.
- Bonfil Batalla, Guillermo (1990). *México profundo: una civilización negada*. México, DF: Grijalbo.
- Cardoso, Marcus (2014). “Respect, dignity and rights: ethnographic registers about community policing in Rio de Janeiro”. *Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology* 11(2): 47–72. doi: 10.1590/S1809-43412014000200002.
- Comaroff, Jean; Comaroff, John (2007). “Law and disorder in the postcolony”. *Social Anthropology* 15(2): 133–52. doi:10.1111/j.0964-0282.2007.00010.x
- Dardot, Pierre; Laval, Christian (2014). *The new way of the world: on neoliberal society*. London & New York: Verso Books.
- Gledhill, John (2005). “Citizenship and the social geography of deep neo-liberalization”. *Anthropologica* 47(1): 81–100. doi: 10.2307/25606219.
- Gledhill, John (2016). *La nueva guerra contra los pobres: la producción de inseguridad en América Latina*. Barcelona: Bellaterra.
- Gohn, Maria da Gloria (2017). *Manifestações e protestas no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade*. São Paulo: Cortez Editora.
- Grayson, George, W. (2007). *Mexican messiah: Andrés Manuel López Obrador*. University Park, PA: Penn State Press.
- Hale, Charles R. (2006). *Más que un indio: racial ambivalence and neoliberal multiculturalism in Guatemala*. Santa Fe: School of American Research Press.
- Harvey, David (2007). “Neoliberalism as creative destruction”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 610(1): 21–44. doi: 10.1177/0002716206296780.
- Heredia, Beatriz M. Alasia de; Palmeira, Moacir (2008). “O voto como adesão”. *Teoria e Cultura* 1(1): 35–58.
- Herzfeld, Michael (2019). “How populism works”, en Bruce Kapferer; Dimitrios Theodossopoulos (eds.) *Democracy’s paradox: populism and its contemporary crisis*. New York: Berghahn Books: 122-138.
- Hita, Maria Gabriela; Gledhill, John (2019). “La política del odio en Brasil”. *Alteridades* 29(58): 47-58. www.doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2019v29n58/Hita.
- Kapferer, Bruce; Gold, Marina (2018). “A nail in the coffin”. *Arena* 152: 37–43.
- Laclau, Ernesto (2005). *On populist reason*. London & New York: Verso.
- Lomnitz-Adler, Claudio (1992). *Exits from the labyrinth: culture and ideology in the Mexican national space*. Berkeley, Los Angeles & Oxford: University of California Press.
- Maldonado Aranda, Salvador (2018). *La ilusión de la seguridad: política y violencia en la periferia michoacana*. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- Mallon, Florencia E. (1995). *Peasant and nation: the making of postcolonial Mexico and Peru*. Berkeley: University of California Press.
- Martin, Keir (2018). “Post-neoliberalism?”, en H. Wydra H; B.Thomassen (eds.) *Handbook of political anthropology*. Cheltenham UK, & Northampton, MA: Edward Elgar Publishing: 205–217.
- Muñoz, Alma E. (2019). “AMLO pide a beneficiarios de Sembrando Vida no ‘echarse en la hamaca’”. *La Jornada*, 18 de mayo de 2019, <https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/05/18/amlo-les-pide-a-beneficiarios-de-sembrando-vida-no-echarse-a-la-hamaca-1782.html>, acceso 19/05/2019.
- Müller, Markus-Michael (2016). *The punitive city: privatized policing and protection in Mexico City*. London: Zed Books.
- Nordstrom, Carolyn (2000). “Shadows and sovereigns”. *Theory, Culture & Society* 17(4): 35–54.
- Nuijten, Monique; Koster, Martijn; De Vries, Pieter; Campelo Cabral, Augusto Antonio (2018). “Regimes de ordenação espacial no Brasil: a fusão de neoliberalismo, populismo de esquerda e visões modernistas na urbanização de favelas no Recife”. *Caderno CRH* 31: 59–73. doi: 10.1590/S0103-49792018000100004.
- Pinheiro-Machado, Rosana; Scalco, Lucia Mury (2018). Da esperança ao ódio: juventude, política e pobreza do lulismo ao bolsonarismo. *Caderno IHUideas* 16(278): 1–13.
- Rolnik, Raquel (2019). *Urban warfare: housing under the empire of urban finance*. London & New York: Verso.
- Schwarz, Lilia Moritz (2019). *Sobre o autoritarismo brasileiro*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Segalla, Vicinius (2018) “Olavo de Carvalho criou filhos fora da escola e em comunidade islâmica”. *Carta Capital*, 4 de diciembre de 2018, <https://www.cartacapital.com.br/politica/olavo-de-carvalho-criou-filhos-fora-da-escola-e-em-comunidade-islamica/>, acceso 4/12/2018.
- Silva, Patricio (1991). “Technocrats and politics in Chile: from the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks”. *Journal of Latin American Studies* 23(2):385–410. doi: 10.1017/S0022216X00014048.
- Souza, Jessé (2017). *A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato*. São Paulo: LeYa.
- Streeck, Wolfgang (2016). *How will capitalism end?*. London & New York: Verso.
- Yates, Julian S; Bakker, Karen (2013). “Debating the ‘post-neoliberal turn’ in Latin America”. *Progress in Human Geography* 38(1): 62-90. doi:10.1177/0309132513500372.
- Zaluar, Alba; Barcellos, Cristovam (2013). “Mortes prematuras e conflito armado pelo domínio das favelas no Rio de Janeiro”. *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 28(81): 17–31. doi: 10.1590/S0102-69092013000100002.